

31877

TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO

PLANIFICACION Y CONTROL DEL USO DEL SUELO URBANO DEL TERRITORIO.

1ER. INFORME PARCIAL



ORGANISMOS Y AREAS TECNICAS PARTICIPANTES

C.F.I. AREA COOPERACION TECNICA  
SUB-AREA ASESORAMIENTO SECTORIAL

TERRITORIO MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA.  
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO TERRITORIAL.  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.  
MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE.

EXPERTO PRINCIPAL: Arquitecto Néstor Omar Bono.  
EXPERTA LEGAL: Dra. María Graciela Reiriz

FECHA: 28 de OCTUBRE DE 1986.

①  
F. 331.9  
B26 pl  
II

#### 1ER. INFORME PARCIAL

El contenido de este informe está referido a reseñar lo actuado en relación al Plan de Trabajo.

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA LA PLANIFICACION Y CONTROL DEL USO DEL SUELO URBANO A NIVEL TERRITORIAL.

- 1- Definición de objetivos, políticas y estrategias que deben regir el proceso de urbanización y el control de ese proceso por parte del Territorio.
- 2- Planteo de líneas de acción y esquemas generales de organización e implementación del Sistema Territorial.
- 3- Discusión de la propuesta y lineamientos del sistema urbano en el nivel - Territorial (técnico y político).

4- Elaboración de la Ley de Uso del Suelo.

4.1. Reglamentación.

5- Definición de mecanismos técnicos - administrativos para la implementación del Sistema.

5.1. Propuesta de reestructuración administrativa.

5.2. Recomendaciones de orden económico.

6- Anteproyectos de códigos urbanos de aplicación municipal para Río Grande y Ushuaia.

6.1. Plano Director.

6.2. Zonificación y normas urbanísticas.

## INDICE.

### CAPITULO I: SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO.

- 1- Crecimiento Urbano.
- 2- Perspectiva de crecimiento futuro.
- 3- Evolución de las actividades económicas.

### CAPITULO II: MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL.

- 1- Introducción.
- 2- Condicionantes derivados de la organización política administrativa.
  - 2.1- Régimen Institucional del Territorio.
  - 2.2- Gobierno y Administración del Territorio, modificaciones operadas.
    - 2.2.1- Poder Legislativo.
    - 2.2.2- Poder Ejecutivo.
  - 2.3- División Política-administrativa del Territorio.
  - 2.4- Régimen de competencia de los distintos niveles gubernamentales y sectoriales en materia de desarrollo urbano y económico social.
    - 2.4.1- Competencia en materia de desarrollo urbano.
      - 2.4.1.1- A Nivel Nacional.
      - 2.4.1.2- A Nivel Territorial.
      - 2.4.1.3- A Nivel Municipal.
      - 2.4.1.4- Competencias de Organismos y Entes Sectoriales.
    - 2.4.2- Competencias en materia de desarrollo económico-social.
      - 2.4.2.1- A Nivel Nacional.
      - 2.4.2.2- A Nivel Territorial.

2.4.2.3- A Nivel Municipal.

2.4.2.4- Regímenes especiales en materia económico social.

2.4.2.5- Promoción del desarrollo de la Isla de los Estados.

2.4.2.6- Fomento del Sistema Cooperativo.

3- Condicionantes derivados del régimen de propiedad y ocupación del Suelo.

3.1- Bienes estatales.

3.1.1- Régimen de adjudicación de los predios fiscales urbanos.

3.2- Propiedad inmueble de los particulares.

4- Condicionantes derivados de la situación geográfica fronteriza.

5- Conclusiones.

### CAPITULO III: PROPUESTAS

1- Marco General.

2- Estrategias para la implementación de un Sistema de Planeamiento Integral del Territorio.

2.1- Acciones en el corto plazo.

2.2- Acciones en el mediano plazo.

3- Bases para la implementación de un sistema de Planeamiento Integral del Territorio en el corto plazo.

4- Propuesta para el Sistema de Planeamiento Integral del Territorio.

### CAPITULO IV: TAREAS EN DESARROLLO,

CAPITULO I      SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO

#### 1- CRECIMIENTO URBANO.

El Territorio Nacional de Tierra del Fuego es la jurisdicción del país que ha experimentado el mayor crecimiento poblacional relativo, en la década 1970-1980.

La tasa de variación intercensal para la población urbana indica para ese período un incremento del 109,6 %. Además, considerando un lapso de veinte años (1960-80) se observa que ese índice alcanza al 243,1 %, sólo superado por la provincia de Santa Cruz que verificó el mayor crecimiento relativo de la década 1960-1970 (Cuadro nº 1).

La población total de la Isla Grande de Tierra del Fuego pasa de 11.562 habi-



tantes en 1970 a 27.358 en 1980, estimándose que para 1985 alcanzaba a -- 48.459 habitantes - (Cuadro Nº 2) de los cuales 45.793 correspondían a población urbana (Cuadro Nº 3).

Este crecimiento acelerado ha determinado que las primitivas estructuras urbanas de los asentamientos de Río Grande y Ushuaia se hayan modificado sustancialmente en los últimos años.

Hoy se observa que:

\* En Río Grande, donde la superficie bruta urbana era de 306,47 Ha en el año 1982 (1), ha crecido hasta alcanzar las 515 Ha, para un crecimiento poblacional equivalente a 11.202 Habitantes (1) (Plano 1).

\* En Ushuaia, con una superficie bruta de 257 Ha en 1982 (2) se pasó en -- 1985 a 402 Ha, para un incremento poblacional de 8.140 Habitantes (2). (Plano 2).

\* La densidad media bruta ha aumentado en ambos núcleos urbanos. En Río Grande paso de 43 Hab./Ha en 1982 a 47 Hab./Ha en 1985, mientras que en Ushuaia, para los mismos años, los valores pasan de 38 Hab./Ha a 45 Hab./Ha. (Cuadro Nº 4).

Esta expansión producto de decisiones adoptadas por la propia autoridad Territorial se ha materializado a través de distintas modalidades de ocupación y uso del suelo en ambos centros urbanos sin que ello respondiera a una clara definición de política Territorial en relación a directrices de ordenamiento físico-espacial oportunamente elaboradas (3).

Nota:

(1) Se descontó superficie ocupada por el BIM Nº 5 (Radio Censal Nº 2 -INDEC 1980) - y la población allí asentada para el cálculo de densidad bruta.

(2) Se descontó superficie ocupada por la Base Aero-Naval (Radio Censal Nº 2) y Barrio de la Armada (Radio 5) y la población allí asentada, para el cálculo de densidad bruta.

(3) Revisión y actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación para las ciudades de Río Grande y Ushuaia-Arq. Néstor Bono-Arq.M.E.Conaresti-Dra. Graciela Reiniz - CFI -1982-

Es así como los requerimientos de suelo para nuevas radicaciones han sido y están siendo satisfechos a partir de nuevos parcelamientos urbanos que - dan origen a una extensión y dispersión de las áreas urbanas que, de haber se planteado otro tipo de medidas o patrones de ocupación, no darían como resultado los costos sociales y económicos -derivados de la consecuente necesidad de proveer de nuevos equipamientos e infraestructura de servicios urbanos- que hoy se verifican.

En el año 1982, en el estudio revisión y actualización de los Códigos de - Planeamiento y Edificación para las ciudades de Río Grande y Ushuaia (3), - se realizó una estimación teórica de la superficie de tierra requerida para la población proyectada al año 1995, para ambos núcleos urbanos.

Esta estimación se elaboró a partir de la formulación de distintas hipóte-- sis sobre la base de los distintos patrones de ocupación del suelo detecta-- dos a través del análisis urbanístico realizado en el Territorio en esa o-- portunidad.

Las Hipótesis utilizadas fueron las siguientes:

I- Se supone que la ocupación futura responderá a los actuales patrones de ocupación del suelo. Se consideró la densidad media bruta que se verifi-- caba en cada centro urbano.

(Río Grande = 43 Hab./Ha., Ushuaia = 38 Hab./Ha.)

II- Se supone que la ocupación se desarrollará según las densidades promedio de los conjuntos habitacionales construídos por iniciativa oficial (120 Hab./Ha.)

III- Se supone que la ocupación se desarrollará según las densidades máximas detectadas en aquellos conjuntos (200 Hab./Ha.)

(3) Op. Cit.

IV- Se supone una ocupación por parte del 60 % de la población incremental según densidad promedio de los conjuntos habitacionales (hipótesis II) y del 40 % de la misma según iniciativa privada en la densidad bruta - promedio de cada núcleo (hipótesis I).

Los resultados de esta estimación se aprecian en el Cuadro Nº 5 donde se han consignado los valores de la población incremental (según hipótesis de máxima para 1995) y la superficie de tierra necesaria según las distintas hipótesis adoptadas, para cada centro urbano.

En dicho cuadro se observa que en la situación más desfavorable las superficies necesarias para incrementos poblacionales equivalentes a 18.142 Hab. en Río Grande y 13.692 Hab. en Ushuaia, se requerirían 420 Ha. y 360 Ha., respectivamente.

En base a esas mismas hipótesis se han elaborado las estimaciones de superficie de tierra requerida para las proyecciones de población a los años - 1990 y 1995 (mínima), que son relativamente coincidentes con los incrementos poblacionales que presentan ambos núcleos urbanos al año 1985 (Cuadro Nº 6 y Nº 7).

Se observa que adoptando densidades correspondientes a conjuntos habitacionales contruidos por iniciativa oficial - 120 Hab./Ha. como promedio o 200 Hab./Ha. como máxima -, los incrementos poblacionales estimados requerirían una superficie de tierra que variaría entre:

- Para Río Grande, de 58 a 96 Ha., según las hipótesis para 1995 (mínima) y de 63 a 105 Ha., para las hipótesis de 1990.

- Para Ushuaia, entre 44 y 73 Ha., en las alternativas correspondientes a 1995 (mínima) y entre 47 y 79 Ha., para 1990.

Debe considerarse, asimismo, que al año 1982, existía en los núcleos urbanos estudiados, un stock de tierra vacante equivalente a 75,7 hectáreas en Río Grande y de 25,96 hectáreas en Ushuaia, cifras que no contemplan los sectores o parcelas urbanas, que ha esa fecha se consideraban potencialmente renovables.

Teniendo en cuenta que el incremento poblacional registrado entre 1982-1985 alcanza a 11.202 Hab. en Río Grande y 8.140 Hab. en Ushuaia, de haberse -- cambiado los patrones de intensidad de ocupación del suelo, adoptando los correspondientes a conjuntos habitacionales (120 Hab./Ha. - 200 Hab./Ha.), la superficie necesaria para albergar esa población sería: (Cuadro N° 8).

- En Río Grande, entre 41 y 68 Ha.

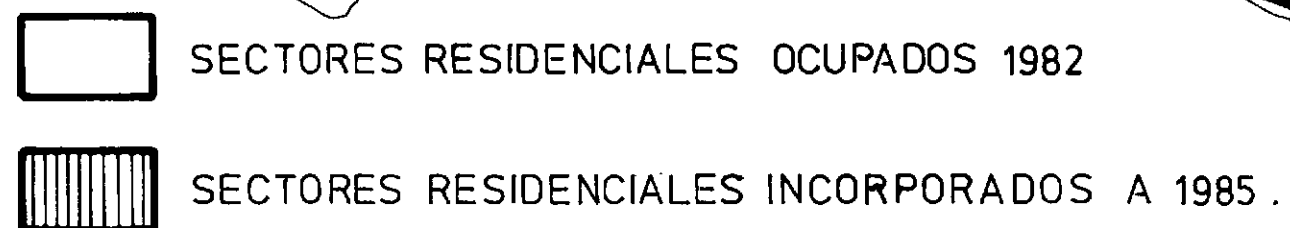
- En Ushuaia, entre 56 y 93 Ha.

De ello se desprende que la superficie necesaria para Río Grande podría haber sido cubierta con el stock de tierra vacante en 1982 (75,7 Ha.), mientras que en Ushuaia, con un stock vacante sensiblemente inferior, se hubiese necesitado incorporar como suelo urbano, entre 30,04 y 67,04 Ha. (Planes 3 y 4).

Hoy, la expansión urbana ha alcanzado a 209 Ha. incorporadas en Río Grande y 145 Ha. en Ushuaia. Esta situación se agrava al considerar que la nueva tierra compromete, como en el caso de Ushuaia, áreas no aptas (turbales) o de interés turístico (los nuevos parcelamientos se hallan próximos al límite del Parque Nacional de Tierra del Fuego).

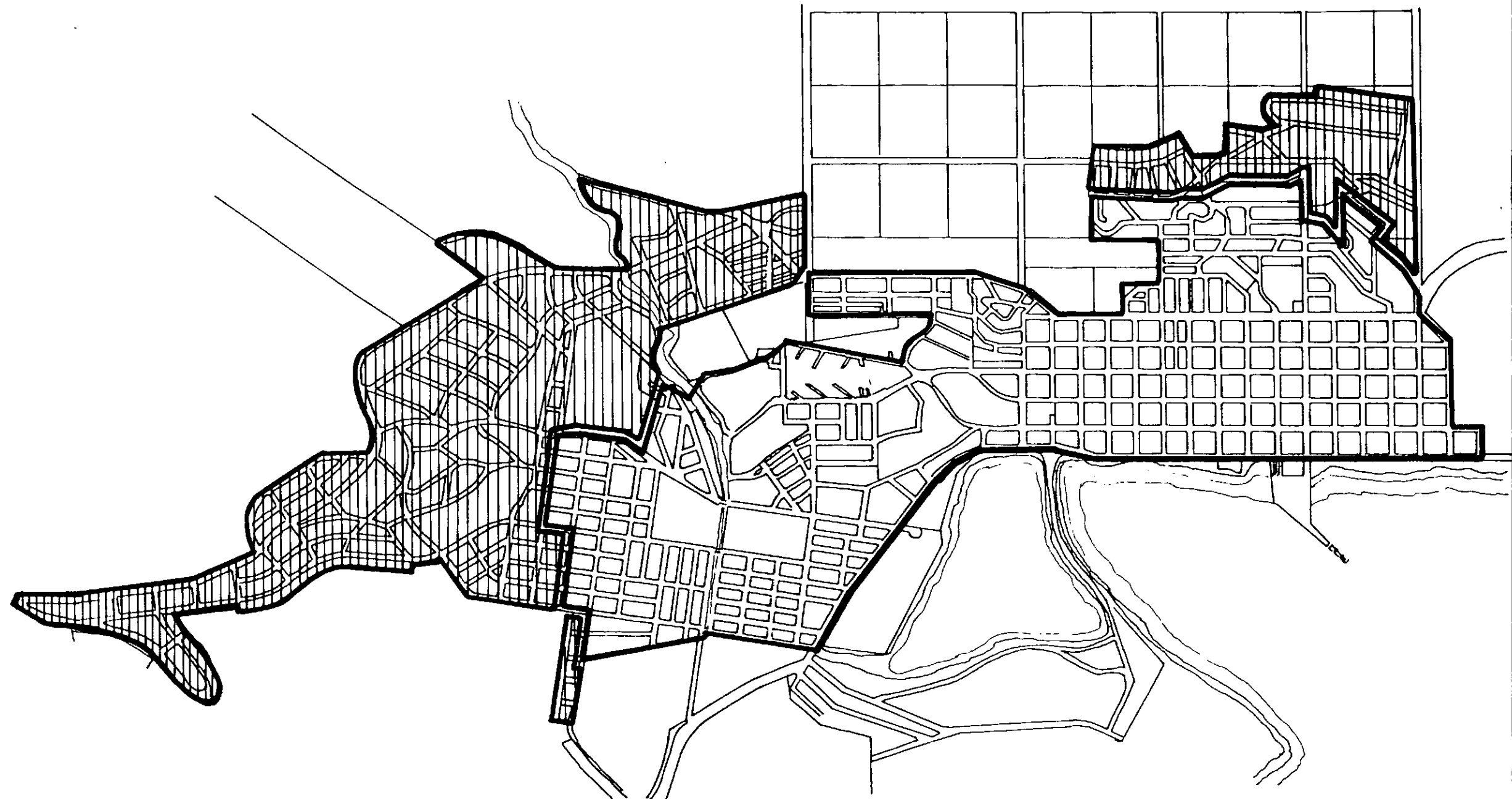
CRECIMIENTO URBANO  
SECTORES RESIDENCIALES  
- RIO GRANDE -

PLANO N° 1



CRECIMIENTO URBANO  
SECTORES RESIDENCIALES  
- USHUAIA -

PLANO N° 2



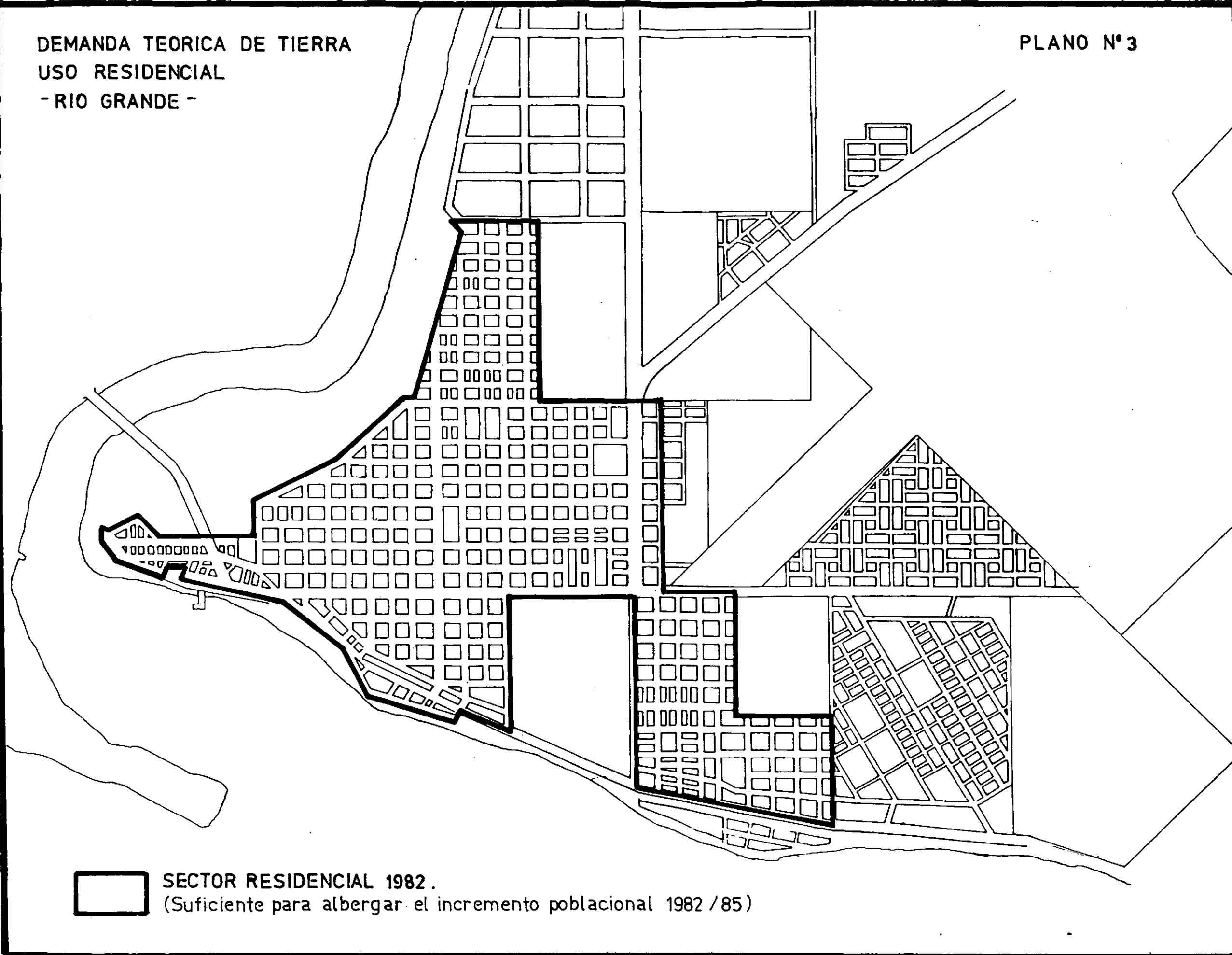
SECTORES RESIDENCIALES 1982



SECTORES RESIDENCIALES INCORPORADOS A 1985.

DEMANDA TEORICA DE TIERRA  
USO RESIDENCIAL  
- RIO GRANDE -

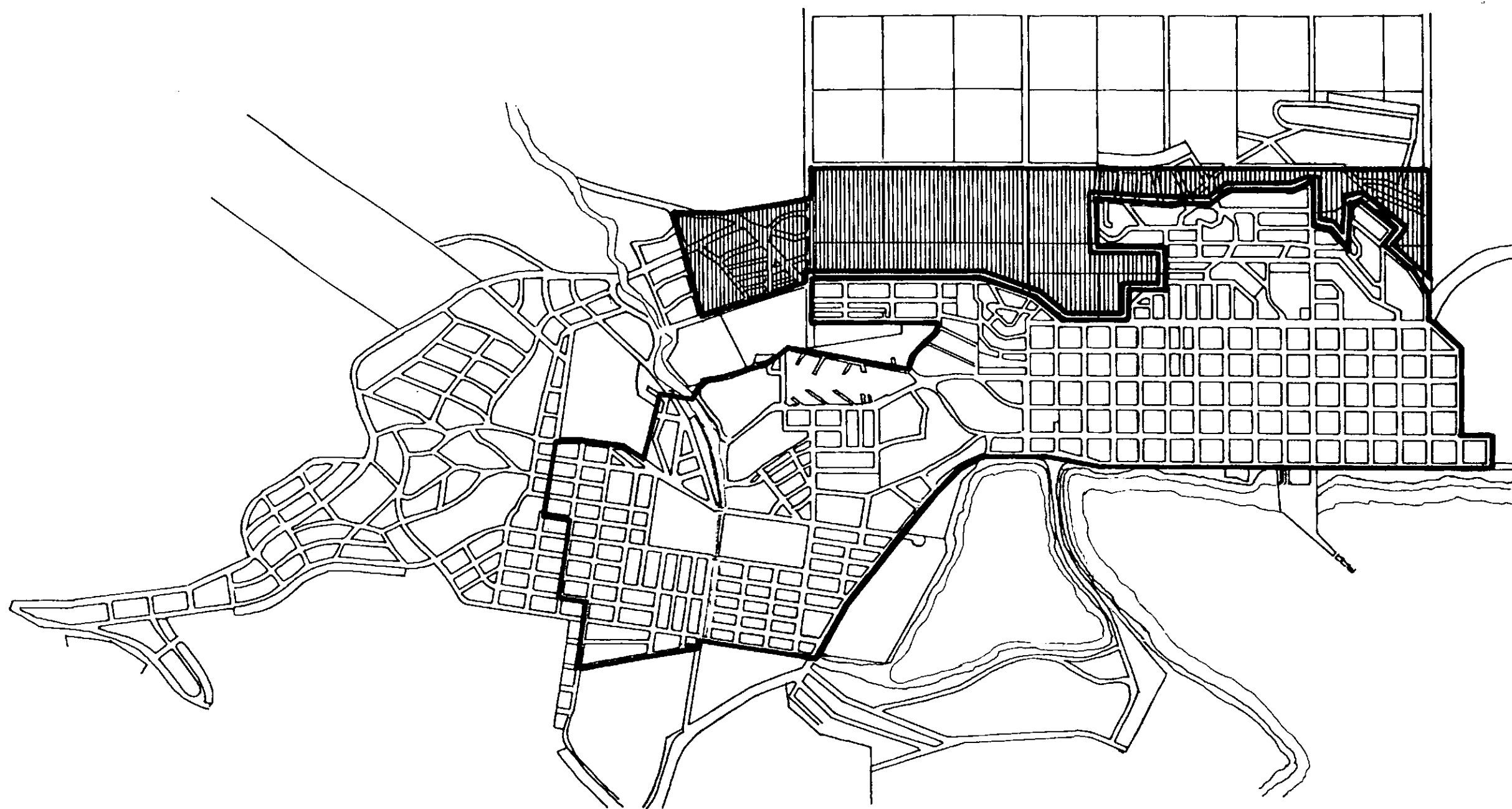
PLANO Nº 3



SECTOR RESIDENCIAL 1982.  
(Suficiente para albergar el incremento poblacional 1982 / 85)

DEMANDA TEORICA DE TIERRA  
USO RESIDENCIAL  
- USHUAIA -

PLANO Nº 4



SECTOR RESIDENCIAL 1982 .



SUPERFICIE NECESARIA PARA ALBERGAR EL INCREMENTO POBLACIONAL 1982 / 85 (Densidad: 120 hab./ha.)



## CRECIMIENTO URBANO

Variación intercensal (%) 1960/70 - 1970/80 - 1960/80

Total del país y por provincias.

Jurisdicción	Variación (%)		
	1960/70	1970/80	1960/80
TOTAL PAIS	30,5	25,7	57,9
Capital Federal	0,2	1,67	1,48
Gran Buenos Aires (1)	42,2	24,9	97,7
Resto Pcia. Bs. As.	17,6	18,5	24,98
Catamarca	29,2	31,00	69,3
Córdoba	29,2	26,0	62,5
Corrientes	30,5	31,9	72,2
Chaco	29,7	60,2	107,7
Chubut	70,5	61,9	176,2
Entre Ríos	25,3	26,7	57,8
Formosa	57,3	74,6	174,7
Jujuy	65,5	53,7	154,4
La Pampa	1,8	57,7	54,7
La Rioja	28,4	44,2	85,2
Mendoza	21,5	28,6	56,3
Misiones	44,2	79,0	158,1
Neuquén	93,2	82,0	251,6
Río Negro	27,6	75,8	124,4
Salta	41,1	48,7	109,8
San Juan	25,2	39,9	75,2
San Luis	16,4	42,9	66,4
Santa Cruz	127,3	54,8	251,9
Santa Fe	15,5	21,8	40,8
Santiago del Estero	26,9	44,9	83,9
Tucumán	18,2	39,1	64,5
Tierra del Fuego	63,6	109,6	243,1

(1) Se consideran los 19 partidos del tradicional

Gran Buenos Aires.

Fuente: Censos Nacionales - INDEC.

## EVOLUCION DE LA POBLACION DE LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO .

AÑO	POBLACION TOTAL (Hab.
1960 (1)	7.064
1970 (1)	11.562
1976 (2)	17.277
1980 (1)	27.358
1983 (2)	38.515
1985 (3)	48.459

## FUENTE:

(1) Censos Nacionales

(2) Censos Territoriales

(3) Cifra estimada por el Ministerio de Economía del Territorio:

Dirección General de Programación y Desarrollo Económico, 1984.

## POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL - POR DEPARTAMENTO - 1980-1985.

Departamento \	1980 (1)			1985 (2)		
	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total
Río Grande	13.271	2.644	15.915	25.644	2.161	27.805
Ushuaia	10.998	445	11.443	20.149	505	20.654
TOTAL	24.269	3.089	27.358	45.793	2.666	48.459

FUENTE:

(1) Censo Nacional de Población y Vivienda - 1980 - INDEC

(2) Estimación según Censo Territorial - 1983 - Dirección General de Programación y Desarrollo Económico del Territorio - 1984 -.

## CRECIMIENTO URBANO (1982-1985)

Población, superficie y densidad media bruta.

	1982			1985		
	Población Urbana	Sup. Ha.	Densidad Media Bruta	Población Urbana	Sup. Ha.	Densidad Med.Bruta
RIO GRANDE	12.903	306,47	43	24.105	515	47
USHUAIA	9.793	257	38	17.933	402	45

FUENTE: Elaboración propia.

## REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA USO RESIDENCIAL

1995 (media)

RIO GRANDE Alternativa	Incremento Poblacional (1995)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra (Has.)
I	18.142	43	420
II	18.142	120	151
III	18.142	200	90
IV	10.885 (60%)	120	90
	7.257 (40%)	43	168
	18.142 (100%)	82	258

USHUAIA Alternativa	Incremento Poblacional (1995)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra (Has.)
I	13.692	38	360
II	13.692	120	114
III	13.692	200	68
IV	8.215 (60%)	120	68
	5.477 (40%)	38	144
	13.692 (100%)	64	212

Fuente:

Revisión y actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación - 1982 -.

## REQUERIMIENTO DE SUELO PARA USO RESIDENCIAL

1990 (media)

RIO GRANDE Alternativa	Incremento Poblacional (1990)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra Has.
I	12.611	43	293
II	12.611	120	105
III	12.611	200	63
IV	7.567 (60%)	120	62
	5.044 (40%)	43	117
	12.611 (100%)	70	179

USHUAIA Alternativa	Incremento Poblacional (1990)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra Has.
I	9.511	38	250
II	9.511	120	79
III	9.511	200	47
IV	5.707	120	48
	3.804	38	100
	9.511	64	148

## FUENTE:

Elaboración propia sobre la base, revisión y actualización de los  
Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación -1982-

## REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA USO RESIDENCIAL

1995 (mínima)

RIO GRANDE Alternativa	Incremento Poblacional 1995 (mínima)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra Ha.
I	11.590	43	269
II	11.590	120	96
III	11.590	200	58
IV	6.954 (60%)	120	58
	4.636 (40%)	43	108
	11.590 (100%)	70	166
USHUAIA Alternativa	Incremento Poblacional 1995 (mínima)	Densidad Bruta (Hab./Ha.)	Superficie de Tierra Ha.
I	8.737	38	230
II	8.737	120	73
III	8.737	200	44
IV	5.242 (60%)	120	44
	3.495 (40%)	38	92
	8.737 (100%)	64	136

## FUENTE:

Elaboración propia sobre la base, Revisión y Actualización de los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación -1982-

## ESTIMACION DE TIERRA NECESARIA PARA CRECIMIENTO POBLACIONAL

1985, según alternativas II y III

	Incremento Poblacional 1982-1985	Dens. Bruta (Hab./Ha.)	Sup. de Tierra necesaria (Ha.)	Sup. Vacante 1982 Ha.
RIO GRANDE	11.202	120	68	75.7
	11.202	200	41	75,7
<hr/>				
USHUAIA	8.140	120	93	25,96
	8.140	200	56	25,96
<hr/>				

FUENTE:

Elaboración propia.



## 2- PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO FUTURO.

Analizando las proyecciones de población realizadas por distintos organismos oficiales así como también las elaboradas en el estudio citado anteriormente, se observa que el crecimiento poblacional experimentado por la Isla de Tierra del Fuego supera dichas estimaciones en lapsos de tiempo menores que los previstos. (1)

En efecto, la sensibilidad de la radicación de población y actividades en relación a las medidas gubernamentales de promoción es tan alta que cualquier modificación de esta política altera cualquier predicción que pueda realizarse ya que el crecimiento de la Isla no responde a tendencias naturales o a una evolución histórica que pueda tomarse como base para efectuar una proyección relativamente válida.

En el Cuadro Nº 9 se señalan las tasas de crecimiento anual medio (por mil habitantes) experimentadas por el Territorio para los quinquenios 70-75, 75-80 y 80-85. En el mismo se observa una vez más el crecimiento explosivo de la población dado que la tasa, que para el primer quinquenio considerado era de -- 74,7 0/00, para el periodo 80-85 es de 111,32 0/00

Como tendencias generales puede mencionarse que se observa una menor participación de la población extranjera en la composición de la población total, una disminución de los saldos migratorios, un leve aumento del crecimiento vegetativo dado que la tasa de nacimientos (por mil habitantes) si bien inferior a la de otros períodos - es para 1984 superior a la experimentada en 1983.

(Cuadros Nº 10; Nº 11 y Nº 12)

### NOTA:

- (1) Para el año 2.000 la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica del Ministerio de Economía estimaba, en 1970, una población de 32 mil habitantes.

De continuarse con las tendencias de crecimiento poblacional señaladas, la población total de la Isla para 1990 podría llegar a duplicarse. Esto determinaría, si los patrones de asentamiento siguen siendo los mismos que los hasta ahora adoptados, que la superficie de tierra necesaria para albergar ese incremento poblacional sería teóricamente -de 800 Ha. para ambos núcleos urbanos-. Por otra parte, no se visualiza claramente hacia donde se orientaría físicamente esa expansión -fundamentalmente en Ushuaia- dado las características topográficas y la gran extensión de tierra ya comprometida con subdivisiones urbanas y ocupada con otros usos no residenciales.

Frente a esta situación, se considera que no sólo es necesario establecer claras pautas en los modos de ocupación y ordenamiento de los núcleos urbanos sino que, además, deberán evaluarse alternativas de metas poblacionales ha alcanzar en el marco de un desarrollo integral del Territorio.

## TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO POR MIL HABITANTES

AÑO	POBLACION TOTAL	TASA CAM./00
1970	11.562 (1)	
1975	16.876 (2)	74,74 (70/75)
1980	27.358 (1)	94,78 (75/80)
1985	48.459 (2)	111,32 (80/85)

## NOTAS:

(1) Censos Nacionales.

(2) Estimación Dirección General de Programación y Desarrollo Económico - 1985 -

RELACION DE LA POBLACION ARGENTINA Y EXTRANJERA  
EN LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO  
PERIODO 1975-1984

AÑOS	POBLACION	TOTAL		ARGENTINOS		EXTRANJEROS	
			%		%		%
1975		16.876	100,0	10.294	61,0	6.582	39,0
1976		17.277	100,0	11.403	66,0	5.874	34,0
1977		18.829	100,0	12.427	66,0	6.402	34,0
1978		21.498	100,0	14.189	66,0	7.309	34,0
1979		24.785	100,0	16.358	66,0	8.427	34,0
1980		27.358	100,0	19.580	71,6	7.778	28,4
1981		29.746	100,0	21.846	73,4	7.900	26,6
1982		34.010	100,0	26.160	76,9	7.850	23,1
1983		38.515	100,0	30.812	80,0	7.703	20,0
1984		43.214	100,0	35.608	83,4	7.606	16,6

FUENTE: Censos Nacionales, Territoriales y Proyecciones.

## SALDO MIGRATORIO CONSIDERANDO INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS

TIERRA DEL FUEGO - 1975 - 1984

AÑO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO MIGRATORIO
1975	75.842	74.436	1.406
1976	82.538	81.502	1.036
1977	70.303	69.298	1.005
1978	62.222	62.428	- 206
1979	80.457	80.027	430
1980	112.641	107.959	4.682
1981	108.243	106.661	1.582
1982	93.759	89.263	4.496
1983	111.462	107.851	3.611
1984	113.381	114.532	-1.151

FUENTE:

Aerolíneas Argentinas, Líneas Aéreas del Estado, Transporte Aeronavales,  
Agencias Marítimas locales y Policía del Territorio.



## TASA DE NACIMIENTOS REGISTRADOS PARA EL PERIODO - 1975-1984 -

AÑOS	NACIMIENTOS TASA POR CADA 1000 HABITANTES
1975	28,0
1976	25,8
1977	37,9
1978	38,3
1979	32,1
1980	34,0
1981	29,0
1982	27,4
1983	26,5
1984	27,9

FUENTE:

Subsecretaría de Salud Pública del Territorio.

### 3- EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

El análisis de la evolución de la estructura económica del territorio, en el período 1980-84, según la participación de las diferentes actividades en el Producto Bruto Geográfico, permite decir que es el sector secundario el que ha experimentado el mayor crecimiento, en detrimento de los sectores primario y terciario.

Por cierto, el mismo pasa de 24,81 % en 1980 al 50,56 % en 1984 (Cuadro N° 13). Considerando en este sector a la industria manufacturera y a la industria de la construcción se observa que la primera evoluciona en ese período de un 12,29 % a un 46,10 %, en tanto que la segunda decrece de un 12,42 % a sólo un 4,45 % en 1984 (Cuadro N° 14).

El número total de establecimientos industriales que en 1980 era de 74 es para 1985 equivalente a 148 plantas que cuentan con 6.242 operarios.

De dichos establecimientos 104 se radican en Río Grande, con 4.150 empleos, y 44 se localizan en Ushuaia con un personal igual a 2.092 operarios - manteniéndose así la primacía en el rol industrial que detentaba el primer núcleo urbano ya en 1982.

A esta evolución acelerada de una actividad eminentemente productiva y clave para el Territorio se suma asimismo el incremento experimentado por la actividad Turística.

En efecto, siendo el movimiento turístico en 1984 igual a 20.795 pasajeros registrados en hoteles, el mismo pasa a 49.381 turistas en 1985 y se estima que

ese caudal fue, para 1986, de 64.000 personas aproximadamente. (Cuadro Nº 15)

Las tendencias registradas por actividades económicas de significativa importancia para el Territorio, evidencian una vez más la necesidad de una planificación y control del desarrollo de las mismas tanto en sus aspectos cuantitativos, cualitativos y de orden físico espacial a fin de que sus impactos - potencialmente positivos no se tornen, de manera irreversible, en efectos negativos que las actuales estructuras urbanas y el medio ambiente en general no puedan absorber.



## EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA SEGUN SECTORES.

(Porcentaje de participación en el Producto Bruto Geográfico)

SECTOR	1980	1981	1982	1983	1984
PRIMARIO	40,23	50,29	58,13	55,57	34,68
SECUNDARIO	24,71	25,22	24,97	27,07	50,56
TERCIARIO	35,06	24,49	16,90	17,36	14,76
TOTAL P.B.G.	100,00	100,00 *	100,00	100,00	100,00

## FUENTE:

Departamento Desarrollo Económico Dirección General de Programación  
y Desarrollo Económico T.N.T.F. - 1985 -.

PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO  
ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGUN GRAN DIVISION

GRAN DIVISION	AÑO 1980	AÑO 1981	AÑO 1982	AÑO 1983	AÑO 1984
1) AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA	2,11 %	2,53 %	2,85 %	2,10 %	1,21 %
2) EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	38,12 %	47,76 %	55,28 %	53,47 %	33,47 %
3) INDUSTRIA MANUFACTURERA	12,29 %	18,19 %	17,27 %	16,59 %	46,10 %
4) ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,69 %	1,34 %	0,90 %	0,89 %	0,63 %
5) CONSTRUCCION	12,42 %	7,03 %	7,70 %	10,48 %	4,45 %
6) COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES	11,21 %	8,24 %	5,62 %	5,25 %	2,93 %
7) TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	4,33 %	2,76 %	2,49 %	2,09 %	1,25 %
8) EST.FINANCIEROS, SEGUROS Y VIENES INMUEBLES	0,46 %	0,44 %	0,44 %	0,33 %	0,21 %
9) SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	17,37 %	11,71 %	7,45 %	8,80 %	9,75 %
TOTAL:	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

FUENTE: Departamento Desarrollo Económico de la Dirección General de Programación y Desarrollo Económico del Territorio.

MOVIMIENTO TURISTICO REGISTRADO EN HOTELES  
TOTAL DEL TERRITORIO - PERIODO 1977-1985

AÑOS	TOTAL DE TURISTAS REGISTRADOS EN HOTELES
1977	13.741
1978	7.690
1979	8.902
1980	26.749
1981	30.224
1982	22.051
1983	21.074
1984	20.795
1985	49.381

FUENTE:

Establecimientos Hoteleros del Territorio.

## CAPITULO II: MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL

## 1- INTRODUCCION

### Objeto y alcances del presente informe

En el Informe Jurídico Institucional de 1982 se identificaron y analizaron - las normas constitucionales legales y reglamentarias (nacionales, territoriales y municipales) que condicionan el planeamiento urbano y la edificación - de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, precisando asimismo los alcances de los diversos niveles jurisdiccionales que inciden en la problemática de su - desarrollo urbano y económico-social.

Se detectaron tres tipos de condicionantes básicos:

- \* Los derivados de la organización político-administrativa del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud.

- \* los derivados de la propiedad y ocupación del suelo; y
- \* los derivados de la situación geográfica fronteriza del Territorio.

En ese orden, se efectuó el análisis de las normas e instituciones jurídicas relevadas, vigentes a la fecha del informe.

Los trascendentes cambios producidos, en el campo político institucional, - desde entonces a la fecha, han determinado modificaciones importantes en el plexo normativo en análisis, por lo que se impone la necesidad de revisar y actualizar el informe de 1982 para contar con el marco de referencia adecuado para la propuesta del Sistema de Planificación Urbana y Control del Uso del Suelo del Territorio.

La tarea de revisión y actualización se efectuará en dos etapas: la primera, a la que corresponde el presente informe se refiere a las normas constitucionales legales y reglamentarias de los niveles jurisdiccionales nacional y territorial. En una segunda etapa, se hará lo propio con las normas de los municipios de Río Grande y de Ushuaia.

## 2- CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA ORGANIZACION POLITICA-ADMINISTRATIVA

### 2.1. Régimen institucional del Territorio.

El régimen jurídico del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, fijado en el Decreto-Ley 2197/57, que fue analizado en el informe de 1982, se mantiene vigente hasta la fecha.

Sin embargo, el 15 de abril de 1986 el Poder Ejecutivo Nacional remitió, al Honorable Congreso de la Nación, un proyecto de ley propiciando la provincialización del "Territorio de Tierra del Fuego e Islas de los Estados y de Año Nuevo", fundado en los artículos 13 y 67 inc. 14 de la Constitución Nacional

El art. 13 establece que:

"Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación/.../"

y el art. 67 inc. 14 atribuye, al Congreso, competencia para:

"arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar -  
los de las provincias, crear otras nuevas/.../"

Reglamentando esas normas constitucionales, la Ley 14315 (A.D.L.A. XIV-A-91) Orgánica de Territorios Nacionales preceptúa, en su art. 60°, que:

"El Territorio nacional con medios económicos y condiciones sociales que -  
permitan su autonomía de administración y gobierno, que pueda atender a -  
las necesidades del régimen de justicia y educación en cuanto le corres--  
ponda, podrá ser declarado provincia mediante una ley del Congreso de la  
Nación que fijará el procedimiento a seguir".

En el "Mensaje" del P.E.N. que acompaña el Proyecto de Ley, se señala al H.  
Congreso:

"Estos condicionamientos que impone la ley a efectos de propiciar la pro--  
vincialización de un territorio nacional, se cumplen acabadamente. Una --  
próspera economía que cuenta con más de un centenar de empresas cuyo núme--  
ro crece día a día merced a una ley de promoción industrial que favorece  
su radicación, una población que se ha duplicado en un breve período de -  
tiempo con perspectivas de incrementarse significativamente en los próxi--  
mos años y un suelo rico en petróleo y gas natural, auguran un próspero -  
futuro en la región/.../La ubicación geopolítica de la nueva provincia es  
de una importancia manifiesta. Resulta necesario hacer de la zona un pue-  
blo de progreso. Mucho hay por hacer: un adecuado reconocimiento geológi-

co, un aprovechamiento de tierras para ganadería y cultivo y, en fin, la formulación de un proyecto socio-económico que posibilite su integración definitiva a la vida económica nacional/.../"

El proyecto del P.E.N., que declara provincia "al Territorio que comprende la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego e Islas de los Estados y Año Nuevo, conforme a los límites establecidos por el Estado Nacional con la República de Chile" (art. 1º) no abarca la totalidad del actual Territorio.

En el mensaje presidencial se justifica esta limitación, advirtiendo que -- "el resto del Territorio no involucrado en esta Declaración conservará el statu quo institucional vigente y anterior a la misma, por cuanto su situación excede el marco de una provincia involucrando los intereses de toda la Nación" (último párrafo).

Se autoriza al P.E.N. a convocar a elecciones para elegir una Convención -- Constituyente de quince (15) miembros, la que deberá reunirse en la ciudad de Ushuaia. Se establecen los requisitos y calidades para ser elegidos convencionales, sus prerrogativas e inmunidades y las normas electorales aplicables (art. 2º a 6º). La convención, que deberá sancionar la Constitución de la nueva Provincia y asignarle el nombre con el que se la denominará deberá cumplir su cometido dentro de los noventa (90) días de su instalación, pudiendo el cuerpo prorrogar su mandato, por igual término y por única vez (art. 7º y 8º).

Las disposiciones del Proyecto de mayor interés para el objeto del presente inform son las siguientes:



- \* Las normas Territoriales vigentes a la fecha de la promulgación de la ley de provincialización, mantendrán su validez en el nuevo estado, mientras no fueren derogadas o modificadas por la Constitución de la nueva provincia, por la propia ley de provincialización, o por la Legislatura Provincial (art. 12°).
- \* Las escuelas públicas de educación primaria pasarán a depender de la provincia y la transferencia de los establecimientos secundarios se conven--drá entre la Nación y la Provincia (art. 14°).
- \* El P.E.N. efectuará la entrega de los distintos servicios administrati--vos, con los derechos y obligaciones que deban transferirse a la provin--cia, a cuyo efecto se firmarán convenios entre el Gobierno Nacional y el Provincial (art. 20°).
- \* Pasarán al dominio público y privado de la provincia los bienes inmuebles situados dentro de los respectivos límites territoriales que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación Argentina, con excepción de a--quellos bienes que se necesiten para destinar a un uso o servicio público nacional, o de los demás lugares adquiridos por compra o cesión para esta--blecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utili--dad nacional, en cuyo caso la reserva deberá establecerse por ley de la -Nación dentro de los tres (3) años de promulgada la ley de provincializa--ción (art. 13°).
- \* Las causas judiciales de competencia federal seguirán tramitando por ante el actual Juzgado Federal con asiento en Ushuaia, mientras que las de de--recho común se transferirán al Poder Judicial, una vez que sea organizado por la provincia (art. 15°).

\* Hasta tanto la provincia dicte sus propias disposiciones tributarias, continuarán en vigor los impuestos, tasas y contribuciones, que rijan al - - tiempo de su provincialización (art. 16°).

El día 1° de octubre último la H. Cámara de Diputados de la Nación sancionó el proyecto de ley que pasó en revisión al H. Senado.

En el art. 1° se agregó, al proyecto del P.E.N. la referencia a las "demás islas e islotes adyacentes" a la isla de los Estados y Año Nuevo.

Asimismo se agregó, como art. 2°, el siguiente texto:

" El Territorio del Sector Antártico Argentino, comprendido entre los meri--  
dianos 25° Oeste y 74° Oeste y el paralelo 60° Sur, las Islas Malvinas, --  
las Islas Georgias del Sur y las islas Sandwich del Sur, mantendrán su ac-  
tual estado de Territorio Nacional que se denominará Territorio Nacional -  
de la Antártida, islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. -

Los Territorios de Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur que compo-  
nen con Tierra del Fuego la jurisdicción actual del Territorio Nacional, -  
integrarán la nueva provincia creada cuando la República Argentina recupe-  
re y logre el ejercicio indiscutido de su soberanía y posesión sobre los -  
mismos; salvo que la modalidad de negociación o exigencias de tratados ce-  
lebrados por la Nación, requieran un tratamientos diferente.

En la ciudad de Ushuaia, tendrá su asiento el delegado federal, designado  
por el P.E.N., que tendrá conjuntamente con los organismos competentes la  
función del gobierno y administración civil en estos territorios".

La otra innovación introducida por la H. Cámara de Diputados al Proyecto que  
tuvo origen en el P.E.N., es el art. 3° que establece:

" En la nueva provincia constituída por esta ley, las autoridades locales no electivas actualmente en funciones, continuarán en las mismas según la naturaleza de sus respectivas gestiones y las prescripciones del D-Ley 2191/57, ratificado por la Ley 14467, hasta tanto sean reemplazadas por las que se constituyan conforme a lo previsto en la Constitución -- provincial a dictarse.

Las autoridades locales de origen electivo que se encuentran en funciones, continuarán hasta el término de sus mandatos, salvo que con anterioridad a esta fecha se produzca la instalación de las que se establezcan por la Constitución de la nueva provincia".

## 2.2. Gobierno y Administración del Territorio:

### Modificaciones operadas

En el informe de 1982 se analizó el régimen emergente de la Ley Básica -- del Territorio (D-Ley 2191/57) cuyo art. 15° establece que el Gobierno y Administración del Territorio "será ejercido por un Gobernador, un Consejo territorial y una Administración de Justicia. Actuará el Congreso de la Nación como Legislatura local. Una vez que el Registro Nacional de Electores cuente con más de tres mil inscriptos, cesará el consejo territorial y se instalará una legislatura local electiva".

#### 2.2.1. Poder Legislativo.

Conforme a los resultados arrojados por el Registro de Electores, la instalación de la Legislatura electiva debió efectivizarse con la toma de posesión de sus cargos por las autoridades electas en el año 1973. Pero la Ley nacional n° 19970 sancionada y promulgada el 24 de noviembre de 1972 (A.D. L.A. XXXII-D-5203) suspendió hasta el 25 de mayo de 1977, la instalación -

de la Legislatura Territorial. Reinstalado el Congreso Nacional en 1973, la Ley 19970 (en realidad decreto-ley) no fue derogada, manteniéndose la suspensión de la Legislatura hasta el 25.5.77. Los acontecimientos políticos - del mes de marzo de 1976 impusieron una prórroga de esta situación institucional, asumiendo facultades legislativas el gobernador del Territorio (ver en el apartado 1.1.3.2. de aquel informe, la evolución de la Organización - del Poder Legislativo Territorial).

Cabe señalar que el 10 de diciembre de 1983, al instalarse las autoridades elegidas constitucionalmente, se constituyó la Legislatura Territorial, cuya integración y competencias fueron analizadas en el informe de 1982.

#### 2.2.2. Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a la organización del Poder Ejecutivo Territorial, en el informe anterior se analizó el régimen de Ministerios, Secretarías y Subsecretarías emergente de las leyes 162 y 173 (ADLA XLI-D- 4776 y 4781) actualmente sustituido por imperio de la ley 216 (ADLA XLIV-B-2033) y las modificaciones introducidas por la ley 263 (BO n° 1156 del 11.11.1985).

Este régimen vigente establece que el despacho del gobierno del Territorio estará a cargo de tres ministros:

- a) de Gobierno.
- b) de Economía y Hacienda.
- c) de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.

También dispone que asistan en forma directa, al Gobernador del Territorio, los siguientes funcionarios:

- a) Secretario General.
- b) Secretario de Educación y Cultura.
- c) Asesor Letrado.
- d) Escribano Mayor de Gobierno.

En lo relativo a la asistencia que tendrán los Ministros, dentro de sus respectivas áreas, se han establecido las siguientes sub-secretarías:

- a) Ministerio de Gobierno
  - . Subsecretario de Salud Pública.
  - . Subsecretario de Acción Social, Deportes y Recreación.
  - . Subsecretario de Gobierno.
  - . Jefatura de Policía.
- b) Ministerio de Economía y Hacienda.
  - . Subsecretario de Economía.
  - . Subsecretario de Hacienda.
- c) Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.
  - . Subsecretario de Obras y Servicios Públicos.
  - . Subsecretario de Vivienda.

Teniendo en cuenta la especificidad del presente informe, se anuncian brevemente las competencias de aquellos Ministerios que guarden relación con los temas en análisis:

\* Competencias del Ministerio de Gobierno:

- . Entender en la proposición y ejecución de la política demográfica Territorial.
- . Atender a la administración de todo lo atinente a la tierra fiscal urba-

na, confrontando prioridades con los entes municipales a los efectos de unificar políticamente las adjudicaciones.

\* Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda.

- . Proponer a las autoridades competentes la política crediticia para los distintos rubros de la actividad económica del Territorio.
- . Mantener las relaciones administrativas con los organismos nacionales -- con jurisdicción en el territorio en todo lo atinente al desarrollo de la economía.
- . Estimular y orientar las actividades de la producción, industrialización y comercialización de la riqueza del Territorio.
- . Elaborar y proponer la política agraria y ganadera tendiente a desarrollar la riqueza del Territorio.
- . Entender en el conocimiento sistemático y en el planeamiento de la utilización integral y coordinada de los recursos desde el punto de vista territorial, funcional, social y económico y de manera tal que el aprovechamiento de dichos recursos sirva como instrumento de la integración Territorial.
- . Evaluar y compatibilizar los planes sectoriales para integrarlos en el Plan General de Desarrollo del Territorio.
- . Proponer la política sobre Turismo del Territorio.
- . Percibir todo producto derivado de la administración, enajenación o arrendamiento de bienes patrimoniales del Territorio, como así también recaudar todos los ingresos derivados de impuestos.
- . Atender a la administración de Tierras Fiscales Rurales, Parques Industriales y Registro Catastral.

\* Competencia del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.

- . Entender en la promoción, planificación y fiscalización de programas y proyectos de abastecimiento de agua potable, servicios sanitarios y comunicaciones.
- . Estudiar, proyectar y construir las obras públicas derivadas del Plan General de Gobierno en coordinación con los Gobiernos locales, cuando dichas obras se realicen en el éjido municipal.
- . Realizar el planeamiento y construcción de viviendas en coordinación con las municipalidades cuando dichas obras se realicen en éjido municipal.
- . Controlar y conservar las rutas territoriales, ejecutando el plan vial que se determine en el Plan General de Gobierno.
- . Coordinar y fiscalizar las actividades de los entes privados mixtos u oficiales que actúen en el ámbito de las obras y servicios públicos.
- . Fiscalizar el régimen de prestaciones de los servicios públicos de energía, agua, cloacas y ejecutar la política territorial en materia de comunicaciones y transportes públicos y privados.
- . Confeccionar y actualizar los planes reguladores territoriales.

Cabe señalar además que por Decreto 930/85 (80 8.4.85 n° 1125) se aprobó la estructura orgánica del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, el que en Anexo I ha dispuesto las siguientes Direcciones:

- . Dirección General de Obras y Servicios Públicos.
- . Dirección de Arquitectura.
- . Dirección de Ingeniería y Obras Viales.
- . Dirección de Hidráulica.
- . Dirección de Energía Eléctrica.
- . Dirección de Planeamiento Urbano.

- . Dirección de Geodesia.
- . Dirección de Asuntos Legales.
- . Dirección de Obras por Contrato.
- . Dirección de Administración.
- . Dirección de Servicios Generales.
- . Dirección Territorial de Energía.
- . Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo.
- . Dirección de Obras Zona Norte.
- . Dirección de Obras de Tolhuin
- . Dirección de Obras y Servicios Sanitarios.

Por su estrecha relación con los temas analizados, se hará una breve referencia a la misión y funciones de la Dirección de Planeamiento Urbano:

Misión: Confeccionar y actualizar los planes regulares territoriales, entendiéndose por tales las piezas técnico-financieras que, a través de sus principios, directivas y normas, determinen una estructura y objetivo a alcanzar en distintas escalas de tiempo, brindando una orientación definida a la obra técnica privada y gubernamental:

Funciones:

- 1) Planeamiento de las estructuras de los principales asentamientos urbanos.
- 2) Planeamiento del sistema urbano Territorial.
- 3) Asistencia técnica a los Municipios en todo aquello atinente a su área específica.
- 4) Relevamiento de todas las áreas que puedan originar futuros asentamientos.
- 5) Coordinar con los organismos nacionales y territoriales que tengan ingerencia en el Territorio.



\* En lo referente a las Competencias del Secretario General que depende directamente del Gobernador del Territorio, las mismas se encuentran establecidas en el art. 6° de la ley 216, el cual es asistido en sus funciones por:

- . Subsecretaría Casa Tierra del Fuego
- . Subsecretaría de Turismo e Información Pública
- . Subsecretaría de Planeamiento

\* Las competencias del Secretario de Educación y Cultura y las del Asesor Letrado se encuentran establecidas en los art. 7° y 8° respectivamente. Ambos dependen directamente del Gobernador del Territorio.

\* También depende directamente del Gobernador, el Escribano Mayor de Gobierno, con la competencia que le asigna el art. 9°. Con relación a dicho funcionario, en el anterior informe (año 1982) se expresó que hasta la fecha de producción del mismo, el Territorio carecía de la organización efectiva de la mencionada Escribanía General. Sin embargo, actualmente, la ley 218 (ADLA XLIV -B-2036) y su Decreto reglamentario n° 3634/85 (BO 11.11.85 n° 1156) ha organizado dicha dependencia para posibilitar su correcto funcionamiento.

Cabe señalar que, corresponde a la Escribanía General de Gobierno, registrar y archivar los títulos traslativos de dominio de inmuebles en que el Estado sea parte y realizar los actos notariales extraprotocolares en los que el Territorio Nacional sea parte o tenga algún interés (art. 2° inc. "b" y "c" Ley 218).

### 2.3. División político-administrativa del Territorio.

En el informe de 1982 se describió la división departamental del Territorio,

que mantiene plena vigencia, así como también el régimen municipal estatuído por el Decreto-Ley 2191/57 (ADLA XVII -A-310).

Sin embargo, con posterioridad se ha sancionado la ley 236 (B.O. n° 1105 del 19.11.84) que reglamentó las disposiciones del D-Ley 2191/57 en cuanto al régimen municipal del Territorio.

A estos efectos, otorga a las municipalidades facultades para ejercer el gobierno y la administración de los intereses y servicios comunales del Territorio, organizando municipios de primera y segunda categoría, de acuerdo con el número de habitantes que establece su art. 2°. La delimitación territorial y la determinación de tales categorías deberá efectuarse por Ley, así como la creación de toda nueva municipalidad, que en este caso requiere una ley especial en la que se delimitará su éjido. Comprobándose, por los resultados de un Censo Nacional Territorial, que un centro de población tiene el número de habitantes requerido y la importancia económica necesaria para establecer el régimen municipal o para ascender de categoría, el P.E. debe enviar a la Legislatura del Territorio el proyecto de la ley que corresponda.

En lo referente al Gobierno Municipal, su ejercicio corresponde a una rama ejecutiva y a otra deliberativa.

La rama Ejecutiva está a cargo de un Intendente, cuyos requisitos de elección se encuentran establecidos en el art. 8° de la Ley Orgánica siendo la duración de su mandato de dos (2) años con posibilidad de reelección.

La rama deliberativa se encuentra a cargo de un Concejo Deliberante compuesto de cinco (5) miembros para los municipios de primera categoría y tres (3) para los de segunda categoría.

La duración de sus mandatos es de 2 (dos) años pudiendo ser reelectos.

Para todos los miembros electivos de los Municipios, el Capítulo III establece

ce las inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño de tales cargos. En el Capítulo I del Título II se establece la competencia, atribuciones y deberes del Departamento Deliberativo que, en general, se encuentra facultado para sancionar las ordenanzas del Municipio con carácter de exclusividad, debiendo responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, - seguridad, moralidad, cultura, educación, fomento, conservación y todas las atribuciones encuadradas en su órbita de competencia otorgado por el Decreto-Ley n° 2191/57. Para los casos de transgresiones a las ordenanzas que -- dicte, el Concejo podrá imponer penas de multas, clausura, desocupaciones, traslados de establecimientos comerciales e industriales y demoliciones de edificios, decomisos y arrestos no mayores de 30 días.

Las facultades reglamentarias del Concejo Deliberante están enunciadas en - el art. 35° de la Ley Orgánica. Y, en los art. 37 y 78, se encuentran enumeradas las demás facultades que, en especial, le competen. Se analizarán "infra" las competencias que le corresponden, en materia de desarrollo urbano y económico-social, así como también las que, en esos ámbitos, le corresponden al Departamento Ejecutivo.

El Capítulo I del Título III establece las competencias, atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo, dentro de las cuales pueden destacarse -- las facultades otorgadas para la administración general del municipio y la ejecución de las ordenanzas, tales como:

- . promulgar y publicar las disposiciones del Concejo.
- . reglamentar las ordenanzas sin alterar su espíritu.
- . expedir órdenes para efectivizar las penalidades establecidas, previa constatación de las infracciones.
- . proyectar ordenanzas y proponer su sanción al Concejo.



Además de las dos categorías de municipios que pueden establecerse, la Ley Orgánica permite, en aquellas localidades cuya población no exceda de doscientos (200) habitantes empadronados, que el Poder Ejecutivo cree Comisiones de Fomento que tendrán a su cargo, con delegación de facultades, la administración de los intereses locales.

Las condiciones para su creación y funcionamiento, se encuentran establecidas en el Título VII de la Ley Orgánica.

Finalmente, es necesario destacar que las ciudades de Río Grande y Ushuaia, conforme lo dispuesto por el art. 222 de la Ley Orgánica, constituyen Municipios de Primera Categoría, cuyos ejidos urbanos fueran establecidos por la ley territorial n° 72, que además delimitó la zona urbana del pueblo - Tolhuin y declaró zona de reserva del gobierno del Territorio con destino a su urbanización, el área descripta en el art. 4° de dicha Ley y que fuera mencionada en el punto 1.3.3. del Informe de 1982. Posteriormente en el año 1983 por Ley 205 (80. 15.8.83 n° 1039) se dispuso la creación de un nuevo pueblo bajo el nombre de "San Sebastián", sobre la ribera Sur-Oeste de la Bahía San Sebastián, Departamento de Río Grande, sobre la Ruta Nacional n° 3, debiendo establecerse por Decreto Territorial las bases del trazado y del plan de desarrollo urbano. Hasta tanto se designe la Comisión de Fomento, las funciones de la misma serán ejercidas por la Municipalidad de Río Grande la que podrá designar un delegado "ad honorem", poblador de la zona. Cabe advertir que la ley 236 establece disposiciones especiales que comenzarán a regir a partir de la provincialización del Territorio que, tal como se expresó precedentemente, ya cuenta con media sanción legislativa. Dentro de las mencionadas disposiciones, cabe destacar lo establecido por el art. 223 por el cual se declaran de propiedad de las Municipalidades, todas las tierras fiscales baldías sin propietario, que se encuentren dentro

de sus límites, con excepción de aquellas que se hubieren reservado los - Gobiernos de la Provincia o de la Nación, para obras de utilidad pública; debiendo dichas reservas ser comunicadas, por escrito a las autoridades, dentro del término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de esta disposición. Pero, si posteriormente la Provincia o la Nación necesitaran utilizar un terreno baldío de los comprendidos en este artículo, para obras de utilidad pública, la Municipalidad deberá cederlo gratuitamente siempre que no esté afectado con anterioridad a una obra pública municipal.

#### 2.4. Régimen de competencia de los distintos niveles gubernamentales y sectoriales, en materia de desarrollo urbano y económico-social.

Tal como se expresó en el informe de 1982 el reparto constitucional de competencias (Nación y Provincias) presenta características especiales en el caso del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dado que el Territorio es una dependencia del Gobierno Federal que ejerce, sobre él, una jurisdicción exclusiva. El Gobernador del Territorio tiene dependencia funcional con el PEN.

Por eso para analizar el tema del acápite debe partirse de las competencias -en materia de desarrollo urbano y económico- que ejerce el Estado Nacional y luego examinar aquellas delegadas a las autoridades del Territorio.

Respecto de estas últimas cabe recordar los alcances del presente informe ("supra" Introducción): sólo se relevan y analizan normas territoriales y no las de los municipios de Río Grande y Ushuaia, que serán objeto del -- próximo informe.

##### 2.4.1. Competencia en materia de desarrollo urbano.

#### 2.4.1.1. A nivel nacional:

La ley de Ministerios analizada en el informe de 1982 (Ley 22520) ha sido parcialmente modificada, por lo que corresponde actualizar su reseña, en relación a la materia específica del desarrollo urbano.

En el Texto Ordenado de 1983 y su Decreto Reglamentario n° 132/83 (ADLA XL IV-A-108) la competencia relativa al planeamiento urbano y regional corresponde al Ministerio de Salud y Acción Social.

El art. 24 (modificado por la ley 23317 (ADLA XLVI-B-1136), le otorga competencia, entre otras, para:

- . entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realicen el Estado Nacional, las provincias y los municipios en lo concerniente a los planes de viviendas y el planeamiento urbano, acorde con el régimen de asentamientos humanos que establezca la política de ordenamiento Territorial.
- . intervenir en los aspectos relacionados con el abastecimiento de agua potable, disposición de líquidos cloacales y todo otro servicio sanitario en los aspectos de su competencia.
- . intervenir en la elaboración de los planes de urbanismo para adecuar la vivienda, tanto rural como urbana, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo integral de la familia.
- . entender en la elaboración y fiscalización de las normas relacionadas con la contaminación ambiental, con la intervención de los sectores -- que correspondan.
- . entender en la elaboración de normas a tener en cuenta en las programaciones ambientales a nivel regional y de asentamiento humano, acorde -

con la política nacional de ordenamiento Territorial.

- . entender en la elaboración de normas de preservación del medio ambiente referidas al uso posible del Territorio y de los recursos naturales en relación con la localización de actividades económicas y de obras de de infraestructura.
- . entender en la organización, dirección y fiscalización de un registro que permita inventariar fuentes de emisión y descarga de contaminantes.
- . entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Además de las competencias del Ministerio de Salud y Acción Social enunciadas, es necesario destacar la importancia de las funciones vinculadas con el Desarrollo Urbano y Regional que competen al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en particular todo lo referente al régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales; obras públicas nacionales; viales; obras sanitarias; transportes nacionales e internacionales; comunicaciones; energía; electificación rural; telecomunicaciones; radiodifusión y televisión; servicio postal; política hidráulica nacional; etc.

De conformidad con los Decretos 15/83, 134/83 y 1932/85 (ADLA XLV-D-3704), - las competencias "ut supra" enunciadas del Ministerio de Salud y Acción Social, son ejercidas a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, que cuenta con las Subsecretarías de Vivienda y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

#### 2.4.1.2. A nivel Territorial.

Las competencias de la Legislatura en esta materia, analizadas en el informe de 1982, así como las facultades asignadas al Gobernador del Territorio, mantienen plena vigencia.

En lo referente a las atribuciones ministeriales, ver "supra" el apartado 1.2.2.

#### 2.4.1.3. A nivel Municipal:

Además de lo expresado en el informe que se actualiza, es necesario analizar las atribuciones municipales que surgen de la ley territorial n° 236 - que, en su art. 35, faculta al Concejo Deliberante para reglamentar.

- . el funcionamiento, ubicación e instalación, de los establecimientos - comerciales e industriales, de conformidad con las ordenanzas y leyes que se dictaren.
- . la construcción de los edificios particulares y públicos, sus partes accesorias y las demoliciones.
- . la protección de los árboles, jardines y demás paseos públicos.
- . la apertura, ensanche, construcción, conservación y mejoramiento de - las calles, caminos, paseos públicos y las delineaciones, niveles y - desagües pluviales en las situaciones no comprendidas en la competencia Territorial.
- . lo referente al condominio de muros, cercos y excedentes.
- . los mataderos y lugares de concentración de animales.
- . los abastos, mercados y demás lugares de acopio de frutos y productos.



- . la desinfección del aire, de las aguas, de edificios y de habitaciones, las condiciones para la instalación de pozos de agua, cámaras sépticas, pozos ciegos, aljibes, baños, albañales, chimeneas, hornos, hornallas, estufas, calderas y sus similares en tanto no resulten de competencia del Gobierno Territorial como responsable del cuidado de la Salud Pública y Medio Ambiente.
- . las funciones de policía no delegadas por ley.
- . las máquinas a vapor, calderas, motores eléctricos y en general las instalaciones y funcionamiento de fábricas que puedan significar un peligro para el personal, para la salubridad o seguridad pública o que puedan incomodar a la población o atentar contra la solidez de los edificios.
- . la contratación de empréstitos, debiendo actuar en estos casos sobre la base de la siguiente regla: al iniciar las tramitaciones deberá discriminar interés, amortización, gastos de negociación, tipos de colocación, recursos que se afectarán a tales servicios y especificar, como requisito esencial, el plan de obras y servicios públicos de utilidad general en que se han de invertir los fondos, plan que deberá contar con los estudios económicos, financieros y técnicos necesarios.
- . formación, uso y conservación de cementerios, arrendamientos y ventas.
- . uso y administración de las propiedades municipales.

Además de las facultades reglamentarias atribuidas al Concejo Deliberante, competen a este Organo las siguientes funciones:

- . adoptar un plan de organización que podrá imponer restricciones y límites

- tes al dominio determinando las zonas residenciales e industriales.
- . constituir cooperadoras municipales de colaboración en el mejoramiento urbanístico y social de las zonas de influencia que se les fijen, pudiéndoseles dotar de medios económicos para su mejor desempeño.
- . construir tablados, mataderos y establecer abastos.
- . habilitar cementerios.
- . autorizar consorcios, convenios, acogimientos a los beneficios de las leyes nacionales y territoriales para la prestación de servicios y obras públicas, en las condiciones establecidas en los art. 50 y 51.
- . autorizar la formación de consorcios entre las Municipalidades y los vecinos con el objeto de promover el progreso urbano y rural del municipio mediante libre aportación de capitales, pero el suscrito por la municipalidad no podrá ser inferior al 10 % del total (art. 52).
- . autorizar la construcción de obras públicas municipales, su mantenimiento y conservación de acuerdo con las modalidades y condiciones establecidas en los art. 69 y 73.

Por otra parte es necesario puntualizar que la ejecución de las obras públicas municipales corresponde al Departamento Ejecutivo de acuerdo con lo establecido en los art. 126 y 139.

#### 2.4.1.4. Competencias de órganos y entes sectoriales:

En el anterior informe se analizaron algunas competencias específicas en materia de desarrollo urbano, atribuidas a órganos y entes sectoriales. Se vuelve sobre ellas a fin de actualizarlas

a) Regulación del uso del suelo:

Dentro de esta materia se analizó la ley Territorial n° 146 (ADLA XL-B-1453) que reglamentó, en lo que hace a su aplicación en el Territorio Nacional, la Ley Nacional de Catastro 20440.

La mencionada Ley Territorial fue parcialmente modificada por ley 219 (ADLA XLIV -B-2037) que derogó su art. 56, el que luego recuperó su vigencia por disposición de la ley 239 (BO 3.12.84 n° 1107) quedando redactado de la siguiente manera:

" La Dirección General de Catastro respetará las decisiones de la autoridad urbanística municipal correspondiente al éjido en que se encuentren las mensuras o, en caso de estar fuera de los mismos, del Organismo de Planeamiento Urbano del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Vivienda. Con anterioridad a la aprobación de las mensuras, deberá contar con el visto bueno de la autoridad correspondiente, que certificará sobre una copia del plano la no oposición a normas urbanísticas vigentes. La institución catastral deberá enviar mensualmente, a la correspondiente autoridad urbanística, copia de los planos registrados".

El resto de las disposiciones de la ley 146 mantienen plenamente su vigencia.

b) Obras Sanitarias:

Además del estudio realizado en el informe del año 1982, cabe agregar que por ley Territorial n° 237 (ADLA XLV-A-663) se prohibió a las reparticiones estatales, entidades públicas y privadas y particulares la descarga -

de afluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen y toda otra fuente, curso o receptor de agua, superficial o subterránea o marina que signifique contaminación del aire o de las aguas, sin previo tratamiento de depuración o neutralización, que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población, flora, fauna terrestre y/o marina. Se prohibió también el desague de líquidos residuales a la calzada con excepción de las aguas de lluvia que puedan conducirse hacia los conductos pluviales.

Las autorizaciones que se concedan para descargas residuales tendrán carácter provisorio.

Prevé además un control de tipo preventivo al requerir autorización de habilitación y aprobación de las instalaciones de provisión de agua y de los efluentes industriales para el comienzo de actividades y habilitación de cualquier establecimiento industrial.

Con relación a los establecimientos, inmuebles e industrias, establece como requisitos para certificar su terminación y habilitación, la inspección y certificación de la Dirección Territorial de Obras y Servicios Sanitarios, en su carácter de ente fiscalizador de la correcta aplicación de esta ley. Corresponde también a las municipalidades, la inspección y control del cumplimiento de la misma pudiendo realizar los trabajos que resulten indispensables para evitar perjuicios o neutralizar la peligrosidad de los efluentes, cuando los responsables rehusaren hacerlo.

Ante las infracciones que comprueben, están facultados a aplicar las siguientes sanciones

- . clausura de los locales o lugares peligrosos o productores de perjuicios.
- . multas.

- . clausura de desagües industriales, la que conlleva la suspensión preventiva de las actividades del establecimiento en cuestión.

c) Energía:

Cabe agregar a lo ya reseñado en el informe que se actualiza, que en el año 1984 se promulgó la ley 242 (80 24.12.84 n° 1110) por la cual se ratificó - el convenio de fecha 9 de noviembre de 1984, celebrado entre la Gobernación del Territorio, la Secretaría de Energía de la Nación y la Cooperativa de - Provisión de Servicios Eléctricos y Vivienda de Río Grande Ltda., mediante - el cual se otorgan subsidios a dicha Cooperativa y se avala la compra - a - la empresa S.E.G.B.A. S.A. - de dos turbo-generadores destinados a superar las necesidades en materia de energía eléctrica de la Ciudad de Río Grande.

d) Vialidad:

La nueva Ley de Ministerios n° 216 otorga competencia en esta área, al Mi--nisterio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, cuyo Decreto Reglamenta--rio que aprobara la estructura orgánica de ese Ministerio (Decreto n° 930/85) dispuso la creación de la Dirección de Ingeniería y Obras Viales con funciones para:

- . Efectuar estudios, proyectos y preparación de las tareas encomendadas.
- . mantener actualizada la información en cuanto a los planes de Vialidad Nacional en el Territorio.
- . Cubrir los aspectos que hacen al transporte de pasajeros y carga den--

- tro del Territorio, coordinando con entes nacionales las pautas a seguir.
- . inspeccionar y controlar las obras de ingeniería y viales, así como su -  
seguimiento y toda la información sobre las mismas.
- . preparar proyectos y documentación para las licitaciones de obras.

#### 2.4.2. Competencias en materia de desarrollo económico-social.

##### 2.4.2.1. Nivel Nacional:

A lo analizado en el informe de 1982 cabe agregar que la Ley de Ministerios - 22520 t.o. 1983 otorga competencias, vinculadas con la materia del acápite, a los siguientes Ministerios y Secretarías de Estados:

##### a) Ministerio del interior (art. 17).

- Estudiar, -con intervención del Ministerio de Economía- la estructura económico-financiera de los estados provinciales para estar en condiciones de asistir a los mismos.
- entender en todo lo relativo a la administración del Fondo Regional.
- entender en el régimen jurídico de las aguas de los ríos interprovinciales y sus afluentes.
- entender en la elaboración y aplicación de normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas.
- intervenir en la creación de condiciones favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.

- intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia.

En el ámbito del Ministerio del Interior, se estructuraron las Secretarías y Subsecretarías (Decreto 15/83 ADLA XLIV-A-105), modificado por el Decreto 416/86 ADLA XLVI-B-1177) resultando de interés la Subsecretaría de Asuntos Técnicos-Económicos con competencia para asistir al Ministro en los estudios sobre estructuras económicas y financieras de las jurisdicciones -- provinciales, del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la M.C.B.A. y en la relación de los mismos con otras jurisdicciones nacionales o locales.

b) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (art. 18)

- entender en las negociaciones económicas internacionales, aportando el punto de vista de la política exterior.
- entender, desde igual punto de vista, en la negociación de la cooperación internacional en los ámbitos educativos, cultural, económico, social, científico, técnico, tecnológico y laboral, en coordinación con el organismo nacional de enlace.
- intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia.
- intervenir en la elaboración y ejecución de la política de emigración e inmigración exterior.

En el ámbito de este Ministerio, por Decreto nº 15/83 y 134/83 modificados por Decreto 447/85 (ADLA 1985-A-214) y 1306/85 (ADLA 1985-C-2069) se establecieron las Secretarías y Subsecretarías, resultando de interés la Subsecretaría de Relaciones Internacionales Económicas, con la misión de asistir -al Ministro- en la definición de los objetivos a alcanzar en materia de política económica exterior y ejecutar las acciones y negociaciones necesarias para su consecución.

Cabe señalar por último, que por Decreto 1306/85 (ADLA XLV-C-2069) se creó la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Económica e Integración Física con la República de Chile para que asuma la representación argentina ante la Comisión Binacional prevista en el art. 12 del Tratado de Paz y Amistad -- con Chile (ley 23172 ADLA XLV-B-1005) y que funcionará bajo la dependencia directa del Ministro.

c) Ministerio de Defensa (ar. 19)

- entender en la elaboración y propuesta de los planes tendientes al -- cumplimiento de los fines de la defensa nacional en las áreas de frontera y su ejecución.
- entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculadas a la navegación por agua y aire, en cuanto sean de su jurisdicción.
- intervenir en la planificación, dirección y ejecución de las actividades productivas en las cuales resulte conveniente la participación -- del Estado por ser de interés para la defensa nacional.



- entender en la planificación, dirección y ejecución de la actividad antártica.

En el ámbito de este Ministerio, resulta de interés la función de la Secretaría y Subsecretaría de Producción para la Defensa (Decreto 15/83, modificado por el Decreto 2770/84 ADLA XLIV-D-3862).

d) Ministerio de Economía (art. 20).

Las competencias que se describen en el informe de 1982 mantienen vigencia. Sin embargo cabe señalar que, para el cumplimiento de las múltiples atribuciones ministeriales, se ha estructurado las siguientes Secretarías y Subsecretarías que tienen vinculación con la temática del presente estudio (Decreto 359/85 ADLA XLV-A-210; Decreto 1189/85 y 1198/85 ADLA XLV -C-2062 y -2065; Decretos 1758/85 y 2057/85 ADLA XLV-D-3690 y 3719; Decreto 3855/84 - ADLA XLV-A-21 y Decreto 2436/86 ADLA XLVI-A-14).

-Secretaría de Coordinación Económica:

Para asistir, al Ministro, en la elaboración y coordinación de las políticas económicas sectoriales y en todo lo relacionado con las inversiones y el financiamiento externo a fin de ajustarlas a la política económica global.

-Secretaría de Hacienda:

Lo relativo al patrimonio, recursos, gastos y financiamientos del Estado, - régimen de seguros y valores públicos, ejecución de la política presupuestaria y tributaria.

-Secretaría de Minería:

Formulación, ejecución y control de la política minera nacional, tendiente

a la defensa, conservación y desarrollo de los recursos naturales.

-Secretaría de Desarrollo Regional:

Elaboración, ejecución y control de políticas relativas a las producciones regionales reguladas por el Estado y en la puesta en marcha de acciones orientadas a promover el desarrollo regional.

-Secretaría de Comercio Interior:

Política comercial interna de la Nación y su promoción; organización y fiscalización del abastecimiento; política de precios; lealtad y sistemas comerciales.

-Secretaría de Industria y Comercio Exterior:

Definición de la política industrial, diseño, financiación y utilización de los instrumentos para el desarrollo, promoción y administración de la industria nacional, así como en lo referido a las participaciones del Estado en las empresas de carácter industrial que dependen directa o indirectamente del Ministerio. Importación y exportación de insumos y productos industriales. Programación, ejecución y control de las negociaciones comerciales internacionales, política de comercio exterior de la Nación y diseño de la estructura arancelaria.

-Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca:

Elaboración, ejecución y control de las políticas apropecuarias y pesqueras

nacionales; protección de los recursos de la fauna y de la flora para conservación, recuperación, defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de su competencia.

-Secretaría de Acción Cooperativa:

Desarrollo y fomento del cooperativismo y de la educación cooperativa en sus diversas ramas, en todo el país.

e) Ministerio de Obras y Servicios Públicos (art. 21)

-Entender en la elaboración de las políticas de tarifas, fletes y precios de las empresas y sociedades del Estado y de los servicios públicos del área de su competencia.

-Intervenir en la elaboración de la política de inversiones extranjeras.

-Entender en la elaboración y ejecución de la política nacional de transportes; en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte; supervisión, fomento y desarrollo técnico y económico de los sistemas de transporte terrestre; transporte de carga; fletes marítimos y fluviales transporte marítimo internacional.

-Entender en la elaboración y ejecución de la política energética nacional coordinación de los planes nacionales de electrificación rural, elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y fijación de sus precios.

-Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional; planes nacionales de riego; adopción de medidas para la defensa de cursos

de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres.

- Intervenir en la compatibilización de la navegabilidad de los cursos de agua con su aprovechamiento como fuente de energía.

En el ámbito de este Ministerio, a través de los Decretos 15/83, 134/84, -- 2483/85 (ADLA XLVI-A-21) y 424/86 (ADLA XLVI-B-1178), se crearon las siguientes Secretarías:

- Secretaría de Coordinación de Obras y Servicios Públicos.
- Secretaría de Comunicaciones, con las Subsecretarías de Planificación y Gestión Tecnológica; la de Telecomunicaciones y la de Radiodifusión.
- Secretaría de Recursos Hídricos.
- Secretaría de Transporte, con Subsecretarías para el Transporte Terrestre, para el Transporte Fluvial y Marítimo y para la Planificación del Transporte.
- Secretaría de Energía, con Subsecretaría de Energía Eléctrica; de Gestión Empresarial; de Combustibles y de planificación Energética.

f) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (art. 23)

En cuanto a temas que tengan vinculación con el presente Estudio, pueden mencionarse las siguientes competencias:

- Entender en el funcionamiento del Servicio Nacional de Empleo e intervenir en la elaboración de la política de migraciones internas y externas e inmigraciones en relación con la necesidad de la mano de obra.
- Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia.

#### 2.4.2.2. Nivel Territorial

La Ley de Ministerio N° 216, atribuye, entre otras, las siguientes competen  
cias vinculadas con el desarrollo económico-social.

##### a) Ministerio de Gobierno (ar. 12°)

- Entender en la proporción y ejecución de la política demográfica territo  
rial.
- Organizar y controlar el régimen sanitario preventivo y asistencial del  
Territorio.
- Otorgar y registrar marcas y señales.
- Atender a la administración y todo lo atinente a la tierra fiscal urbana,  
confrontando prioridades con los entes municipales a los efectos de uni-  
ficar políticamente las adjudicaciones.
- Coordinar, con los Organismos Nacionales pertinentes, la asistencia lo-  
gística y el relevameinto del personal, medios y programas científicos -  
que se desarrollen en la Antártida Argentina (agregado por Ley 263 -RD N°  
1156 del 11.11.85).

##### b) Ministerio de Economía y Hacienda (art. 14°)

- Proponer, a la autoridad competente, la política crediticia para los dis  
tintos rubros de la actividad económica del Territorio.
- Mantener la relación administrativa con los organismos nacionales con ju  
risdicción en el Territorio, en todo lo atinente al desarrollo de la eco  
nomía.

- Estimular y orientar las actividades de la producción, industrialización y comercialización de la riqueza del Territorio.
- Prever, racionalizar y fiscalizar el abastecimiento.
- Registrar las actividades comerciales e industriales.
- Elaborar y proponer la política agraria y ganadera.
- Estudiar y promover las actividades mineras y geológicas y sus derivados.
- Proponer y ejecutar la política para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y renovables.
- Entender en el conocimiento sistemático y en el planeamiento de la utilización integral y coordinada de los recursos, desde el punto de vista Territorial, funcional, social y económico; y de manera tal que el aprovechamiento de dichos recursos sirva como instrumento de la integración Territorial.
- Proponer la política sobre Turismo y la política tributaria del Territorio.
- Percibir todo producto derivado de la administración, enajenación o arrendamiento de bienes patrimoniales del Territorio y recaudar los impuestos.
- Preservar y registrar los bienes del patrimonio Territorial.
- Entender en la administración de Tierras Fiscales Rurales, Parques Industriales y Registro Catastral.

c) Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda (art. 15°)

- Entender en la promoción, planificación, fiscalización de programas y proyectos de abastecimiento de agua potable, servicios sanitarios, energía y comunicaciones; así como también fiscalizar el régimen de prestaciones de los servicios públicos en esas materias.

- Estudiar, proyectar y construir las obras públicas derivadas del Plan General de Gobierno, así como las viviendas; en coordinación con los gobiernos locales cuando dichas obras se realicen en éjido municipal.
- Controlar y conservar las rutas territoriales, ejecutando el plan vial que se determina en el Plan General de Gobierno.
- Coordinar y fiscalizar las actividades de los entes privados, mixtos u oficiles que actúen en el ámbito de las obras y servicios públicos.
- Confeccionar y actualizar los planes reguladores territoriales.

#### 2.4.2.3. Nivel Municipal.

Las materias vinculadas con el desarrollo económico social no son consideradas, en principio, de competencia municipal.

Han sido reservadas, por lo común, a niveles gubernativos más centralizados.

Aparte de las competencias genéricas que se otorgan, a los municipios fueguinos, en el Decreto-Ley 2191/57 (art. 67), la Ley Orgánica N° 236 (80 1105 del 19.11.84) determina las facultades reglamentarias y de gestión que se han examinado "ut supra", en el apartado 2.4.1.3. muchas de las cuales se vinculan con el desarrollo económico-sócial de las poblaciones locales.

En materia de Servicios Públicos, corresponde al Concejo Deliberante la sanción de ordenanzas relativas a la prestación de servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras sanitarias, desagues pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo del Territorio o de la Nación (art. 59)

El Concejo autorizará la prestación de los servicios (art. 60°):

- por ejecución directa del Departamento Ejecutivo.

-mediante organismos descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos.

-mediante concesiones a empresas privadas, cuyo otorgamiento requiere el voto afirmativo de los 2/3 de sus miembros.

En cuanto a las obras públicas, corresponde al Concejo autorizar su construcción, mantenimiento y conservación según las modalidades siguientes (ar.69°):

-Por ejecución directa, con fondos de la Municipalidad.

-Por acogimiento a los beneficios de leyes de la Nación o del Territorio.

-Por consorcios o cooperativas.

-Por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras.

-Por licitación pública o privada, pudiendo convenir con la empresa que ésta tome a su cargo la percepción de las sumas que abonen los beneficiarios como costos de la obra.

El art. 70° enuncia las obras públicas de competencia municipal:

-obras de instalación de servicios públicos.

-obras de pavimentación, veredas y cercos.

-obras de ornato, salubridad y urbanización.

-obras concernientes a establecimientos e instituciones municipales.

#### 2.4.2.4. Régimenes especiales en materia económico-social.

Remisión al informe de 1982.

En materia de régimenes especiales, que fueron analizados en el informe anterior, se hace remisión a lo allí expuesto con las siguientes aclaraciones:

a) Régimen impositivo Territorial.



Se dictaron las siguientes leyes Territoriales, a partir de la asunción de las autoridades constitucionales:


- Ley 223 (B.O. 1089/84) por la que se exime de impuestos inmobiliarios a los jubilados.
- Ley 225 (B.O. 1092/84) fija procedimientos para la percepción de los tritos, impuestos y tasas que se determinan.
- Ley 246 (B.O. 1143/85) modifica el Código Fiscal, fijando importes de impuestos, tasas, derechos y contribuciones (modificada parcialmente por - Ley 258 - B.O. 1154/85).
- Ley 247 (B.O. 1145/85) exime del impuesto de Sellos a las operaciones -- bancarias.

b) Régimen especial fiscal aduanero (Ley 19.640).

Con posterioridad al informe se dictó el Decreto 1057 (ADLA XLIII-B-1437), - de fecha 6 de mayo de 1983, al producirse el vencimiento del plazo mínimo de diez (10) años previsto en la Ley 19.640, a partir del cual el PEN quedó facultado para proceder a la revisión de ciertas condiciones y de los benefi--cios oportunamente establecidos.

El nuevo régimen aprueba el tratamiento aplicable a la importación de mercancías cuyo destino fuese su transformación, procesamiento o utilización por el sector industrial; y a la exportación de productos originarios del área - aduanera especial.

A su vez, por Resolución n° 311 (Secretaría de Industria y Minería de la Nación, de fecha 23 de junio de 1983 (ADLA XLIII-C-2906) se aprobaron los formularios para la presentación de las consultas previas de proyectos industriales para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley 19.640 y Decreto n° 1057/83.



A fin de evaluar las Consultas previas, se creó una Comisión integrada por dos representantes de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación y dos de la Secretaría de Industria y Minería (res. conjunta 425 (S.I.M.) y -- 135 (S.PI.) en ADLA\XLIII-C-2847).

c) Régimen de promoción industrial (Ley 21.608).

Se mantiene en vigencia. Lo dicho en el punto precedente, vale asimismo para el régimen de promoción industrial.

Sin embargo, con posterioridad al informe de 1982 se ha modificado el régimen de promoción territorial para el asentamiento de industrias y actividades de interés territorial en los parques industriales habilitados al efecto. Las disposiciones de los Decretos Territoriales N° 1449/81 y 818/82 han sido modificadas por el Decreto N° 144 de fecha 14 de enero de 1985 (B.O. N° 1115 del 28.1.85).

El Decreto establece los requisitos y formalidades que deberán cumplimentarse para la obtención de predios fiscales urbanos en los parques industriales de Ushuaia, Río Grande, Tolhuin y los que en el futuro se destinaren a tal fin; como también para la obtención de predios en las reservas de áreas fiscales rurales administradas por la Dirección de Recursos Naturales para sus fines propios.

En el nuevo cuerpo normativo, de esa manera, se uniforman los requisitos y la mecánica para la adjudicación de predios en parques industriales y para la adjudicación de predios rurales para propósitos de turismo, actividades agropecuarias, granjas, criaderos, etc.

El régimen Territorial prevé un sistema de adjudicación precaria; y otro, de adjudicación definitiva, una vez que se hayan cumplido requisitos tales como:

mensura, cercado del predio, obra civil, cancelación del valor total del predio, iniciación de las actividades de acuerdo con el proyecto aprobado.

La Dirección de Industria y Comercio y, en su caso, la Dirección de Recursos Naturales, serán los organismos que tendrán a su cargo el control y seguimiento de los proyectos de inversión, quedando facultadas par requerir la asistencia técnica de otros organismos, tanto dentro como fuera del Territorio.

#### 2.4.2.5. Promoción del desarrollo de la Isla de los Estados.

Por Ley Territorial N° 249, promulgada el 28 de agosto de 1985 (B.O. N° 1147 del 9.9.85), se creó una Comisión Asesora para que realice estudios a fin de evaluar las acciones que permitan del desarrollo pleno de la Isla de los Estados y la afectiva integración socio-económica, como así también la permanente custodia de su soberanía.

La Comisión Asesora está integrada por tres (3) legisladores del Territorio, un (1) representante del P.E. Territorial y un (1) representante de la Armada Argentina. Pero la Comisión podrá invitar, a participar de sus trabajos, a representantes de Parques Nacionales, Museo Territorial, Subsecretaria de Planeamiento, Recursos Naturales del Gobierno Territorial y Centro Austral de Investigaciones Científicas.

Por Decreto N° 3338 del 3.10.85 (B.O. N° 1153) el P.E. designó representante al Señor Ministro de Economía y Hacienda.

#### 2.4.2.6. Fomento del Sistema Cooperativo.

La Ley Territorial N° 235, promulgada el 1° de noviembre de 1984 (B.O. N° 1104 del 12.11.84), declaró, de interés Territorial, el fomento y difusión del sistema Cooperativo. A tal efecto, se eximió, de toda tributación Terri-

torial, a las sociedades cooperativas radicadas en el Territorio. Asimismo, se las favoreció con otros estímulos, tales como:

- preferencia a las Cooperativas, a igualdad de condiciones con otros oferentes, en las contrataciones del Estado (reparticiones territoriales centralizadas o autárquicas).
- régimen crediticio preferencial a través del Banco del Territorio.
- asistencia técnica, económica y financiera, por medio del Fondo Territorial de Desarrollo (Cuenta Especial) que se crea por esta ley.

La Autoridad de Aplicación de la Ley 235 es el Ministerio de Economía y Finanzas.

### 3- CONDICIONANTES DERIVADAS DEL REGIMEN DE PROPIEDAD Y OCUPACION DEL SUELO.

#### 3.1. Bienes estatales.

En esta materia los regímenes nacionales y territoriales de bienes públicos y privados del Estado (naturales y artificiales) que se analizaron extensamente en el informe de 1982 se mantienen sustancialmente en vigencia.

En especial, subsiste el problema que se planteaba en el apartado 2.2.4.2., en cuanto a las adjudicaciones de tierras y bosques fiscales que se fueron realizando por decretos del P.E. Territorial y que no han sido convalidadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Se ha señalado "supra", en el apartado 2.1., que el proyecto de ley de provincialización del Territorio prevé el traspaso -al dominio público y privado de la provincia a crearse- los bienes inmuebles situados dentro de sus respectivos límites territoriales que pertenezcan al dominio público y privado de la Nación Argentina, con excepción de aquellos bienes que se necesitan para destinar a un uso o servicio público nacional; o de los demás luga

res adquiridos por compra o cesión para establecimientos de utilidad nacional (art. 67 inc. 27 CN).

Lamentablemente, ni en el Proyecto remitido por el P.E.N. ni en el que obtuvo media sanción legislativa (H. Cámara de Diputados) se ha incluido una cláusula que convalide las adjudicaciones en venta realizadas, por el Territorio, hasta la actualidad; con lo que se está desaprovechando una buena oportunidad de sanear los títulos Territoriales.

### 3.1.1. Régimen de adjudicación de los predios fiscales urbanos.

Por Decreto N° 3262, de fecha 27 de noviembre de 1984, el P.E. Territorial aprobó un nuevo régimen de venta de predios fiscales urbanos, entendiendo por tales aquellos ubicados dentro de los ejidos creados por la Ley n° 72. La Dirección de Tierras Fiscales será el organismo de recepción, contralor y centralización de todas las actuaciones para la adjudicación en venta de tales predios. Controlará que cada solicitante proceda a llenar correctamente los formularios, vigilando el cumplimiento de todas las normas establecidas en el Reglamento hasta la obtención definitiva del título de propiedad por parte del adjudicatario.

Las adjudicaciones en venta se harán por decreto del P.E. Territorial, lo mismo que su caducidad en caso de incumplimiento. El Título de Propiedad, elaborado por la Dirección de Tierras Fiscales, será también firmado por el Gobernador sin intervención notarial.

El valor de venta de los predios se fijará actualizando la valuación fiscal al momento de la adjudicación, mediante el índice de precios mayoristas no-agropecuarios. En los casos de entidades de bien público y asociaciones sin fines de lucro (clubes deportivos y sociales, por ejemplo), se considerará una escala de reducción de hasta el 75 % del evalúo fiscal. También corresponderá un descuento excepcional para aquellos adjudicatarios que acrediten una ocupación --

del predio de más de quince (15) años.

Para ser adjudicatario de predios urbanos con destino a la construcción de la vivienda propia, se deben reunir las siguientes condiciones:

- . Ser argentino nativo o naturalizado, mayor de edad, con residencia en el Territorio no inferior a doce (12) meses.
- . Tener autorización de la Superintendencia de Fronteras , para adquirir el - predio.
- . No poseer otro inmueble en el Territorio, al tiempo de la adjudicación, a su solo nombre o de su cónyuge o de su cohabitante.

También pueden ser adjudicatarios las empresas, asociaciones públicas que -- cumplan con estos requisitos:

- . Presentar proyecto de radicación dentro de los lineamientos reglamentarios - en vigor.
- . Tener domicilio en el país.
- . Tener autorización de la Superintendencia Nacional de Fronteras para adquirir el predio.

En este caso, las adjudicaciones se harán con las siguientes limitaciones:

- . A las empresas, la cantidad de lotes necesarios de acuerdo a la magnitud del proyecto a ejecutar.
- . A las asociaciones sin fines de lucro, la cantidad de lotes necesarios para levantar su sede social, según proyecto a ejecutar.

Cabe señalar, finalmente, que este régimen ha sido parcialmente modificado por el Decreto N° 144/85, en lo que respecta a los predios fiscales urbanos en parques industriales (ver "supra" apartado

### 3.2. Propiedad inmueble de los particulares.

Los regímenes Territoriales analizados en el informe de 1982 (apartado 2.3.)

se mantienen en vigencia, con las modificaciones -en materia de regulación del uso del suelo y descarga de efluentes- que se han reseñado "ut supra", en el apartado 2.4.1.4. "a" y "b".

En materia de restricciones al dominio, cabe recordar las que se encuentran definidas en el Código de Planeamiento para los Asentamientos urbanos de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que se reseñaron en el Informe de 1982 (apartado 2.3.3.3.). Si bien el referido Código ha sufrido algunas modificaciones, las mismas aún carecen de sanción legal y no se encuentran jurídicamente en vigencia.

Por otra parte, tal como se señalara entonces, las Ordenanzas Municipales -son la principal fuente normativa de las limitaciones al dominio por razones urbanísticas y de interés público ya que constituyen, materia comunal, la reglamentación de la construcción de los edificios particulares y públicos, sus partes accesorias y las demoliciones; la apertura, ensanche y mejoramiento de calles, caminos, plazas y paseos públicos, etc.

Por tal motivo, en el próximo Informe, en que se actualizará el relevamiento de las normas de los Municipios de Ushuaia y Río Grande, se hará referencia a las modificaciones que se hayan introducido en materia de limitaciones al dominio de los particulares.

#### 4- CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA SITUACION GEOGRAFICA FRONTERIZA.

En el informe de 1982 se analizó el régimen jurídico de las "zonas de seguridad" (Decreto 15.385/44 ratificado por Ley 12.913) y de las "zonas y áreas -de frontera" (Ley 18.575). Y esto porque, en virtud de lo dispuesto por el Decreto n° 193/82 del P.E.N., se unificaron los límites de las zonas de seguridad y de fronteras y el Territorio de la Tierra del Fuego, Antártida e Is-

las del Atlántico Sur ha quedado íntegramente incluido en zona de frontera (Anexo I, Capítulo XIII, cf. 1 del Decreto 193/82).

Por tal motivo, se analizaron esos regímenes jurídicos específicos, ya que pueden resultar condicionantes de vital importancia para el ordenamiento urbano territorial y, como tales, deben ser tomados en cuenta al tiempo de elaborar la correspondiente normativa. Así, fueron objeto de especial consideración:

- . La servidumbre de fronteras (Ley 14.027 y 21.649).
- . La restricción al dominio y ocupación de los inmuebles y al otorgamiento de permisos y concesiones (Decreto 15.385/44 rarificado por Ley nº - 12.913; Decretos 32.530/48; 4861/49; 11.481/49 y 3026/76).
- . Las limitaciones especiales de inmuebles, edificios y espacios ubicados en centros de frontera (Ley 22.352 y Decreto 1012/81).
- . El régimen específico de delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de tierras fiscales ubicadas en zonas de frontera (Ley 21.900).

Sin embargo, al tiempo de producirse el informe de 1982, el Territorio no estaba considerado "área de frontera", régimen específico que la Ley 18.575 prevé para la promoción prioritaria de su desarrollo en atención a su situación y características especiales (art. 3º).

El gobierno del Territorio demostró interés en que, el mismo, fuera incluido dentro de ese régimen especial de promoción, con miras a implementar políticas que facilitaran la radicación y actividad de técnicos y profesionales en el área.

Se logró ese objetivo con la sanción del Decreto nº 2486, del 22 de septiembre de 1983, por el P.E.N., que delimitó todas las Áreas de Frontera de la República. Precisamente la primera, en el Territorio, comprende la parte ar



entina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. (Anexo I).

## 5- CONCLUSIONES.

5.1. Los tres tipos de condicionantes que se analizaron en el Informe de 1982 y que se actualizan en el presente, influyen en el carácter y contenido de -- las normas de control del uso del suelo urbano del Territorio; en los niveles jurisdiccionales y en los órganos competentes para su aprobación e implementación.

5.2. El marco jurídico-institucional está dado por el régimen del Territorio, el que precisamente en la actualidad se encuentra próximo a ser modificado -- sustancialmente por la sanción de la proyectada ley de provincialización.

Esto impondrá la convocatoria a una Convención Constituyente, con el objeto - de sancionar la Constitución para la nueva provincia y aún para asignarle nombre oficial al nuevo Estado.

Esta oportunidad debería ser aprovechada para incorporar -a su texto- algunas disposiciones propias de las constituciones contemporáneas, en mateia de preservación del medio ambiente y calidad de vida; alcances y garantías del derecho de propiedad; dominio de los recursos naturales y régimen específico de la tierra y agua.

En tal sentido, merece que sean tenidas en cuenta las previsiones de la Constitución de la Provincia de San Juan, aprobada el 1º de mayo de 1986 (ADLA - Boletín N° 15 - Año 1986) en sus artículos 58º, 108º, 111º, 113º, 114º, 115º, 116º y 117º; los de la Constitución de Santiago del Estero, aprobada el 15 de marzo de 1986 (ADLA Boletín N° 17 - Año 1986) en materia de régimen económico del agua y forestal (art. 46 a 62); los de la Constitución de Salta, aprobada

el 2 de junio de 1986 (ADLA Boletín N° 20 - Año 1986), en materia de integración regional (art. 8°), protección del medio ambiente defensa de calidad de vida (art. 30), economía (art. 69 a 77) y recursos naturales (art. 78 a - 83).

Constituídas las autoridades provinciales resulta previsible que las normas básicas del nuevo Estado serán modificadas (Ley de Ministerios, Ley de contabilidad, Ley Orgánica de Municipios), por lo que habrá que considerar tal -- circunstancia, que impondrá una nueva actualización del Informe en ese aspecto.

5.3. Mientras continúe vigente la peculiar organización político-administrativa del Territorio, el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda - podrá seguir siendo la autoridad urbanística del Territorio. Como se ha señalado "supra" en 2.2.2., el Decreto 930/85, que aprobó la estructura orgánica de ese Ministerio, dió a la Dirección de Planeamiento Urbano la misión de con feccionar y actualizar los planes reguladores Territoriales.

Sin embargo y, tal como se recomendara en el Informe de 1982, no resulta plausible que la autoridad Territorial asuma atribuciones que, normalmente, son propias de las competencias municipales. Por eso, la autoridad Territorial de biera sancionar el marco normativo general, dentro del cual los municipios de bieran aprobar las normas reglamentarias aplicables en sus jurisdicciones.

5.4. Finalmente, si en la ley de provincialización que se sancione no se in- cluye una cláusula de convalidación de la adjudicaciones en venta de tierras fiscales nacionales, realizadas hasta la actualidad por los sucesivos gobier- nos del Territorio, será menester gestionar la aprobación de un Decreto del P.E.N. que sanee los títulos Territoriales. A partir de la provincialización, las tierras fiscales del Territorio pasarán al dominio de la Provincia, con las excepciones que se establezcan en la ley y, por lo tanto, las autoridades

constitucionales del nuevo Estado dispondrán de ellas de conformidad con el régimen que se dicte al efecto o con las normas actualmente en vigencia en la medida en que no sean expresamente modificadas o derogadas (art. 14° del Proyecto con media sanción legislativa)

CAPITULO III: PROPUESTAS.

## 1- MARCO GENERAL

En función de la definición de objetivos explicitados por el Gobierno Territorial, a través del señor Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, en relación a la situación actual del Territorio, se pone de manifiesto la necesidad de lograr la implementación de mecanismos tendientes a institucionalizar un Sistema de Planificación que permita desarrollar el Planeamiento Integral del Territorio, dentro del cual quedaría enmarcado el Sistema Territorial de Planificación y control del Suelo Urbano.

Frente a este marco de referencia, la propuesta elaborada está dirigida a esbozar un esquema general para la implementación de un Sistema Global de Planeamiento, definiéndose asimismo las estrategias para lograr ese objetivo.

Cabe señalar, sin embargo que, dada la situación imperante en el Territorio, producto del crecimiento significativo experimentado en los núcleos urbanos de Ushuaia y Río Grande y que puede verificarse en el análisis expeditivo - realizado en el Capítulo I del presente trabajo, dicha propuesta no invalida la necesidad de implementar a corto plazo los mecanismos de Planificación del Suelo Urbano.

Para ello, es necesario contar con el marco de referencia normativo que determinara en la actual coyuntura, la Ley de Uso del Suelo Urbano, lo que -- permitirá llevar a cabo la política de ordenamiento físico-espacial que se impone como necesidad, dado la situación vigente ya explicitada.

## 2- ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANÉAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO.

Frente al requerimiento de las autoridades del Territorio y de la situación que éste presenta, se consideró necesario la definición de una estrategia - basada en la propuesta de acciones para el corto y mediano plazo.

### 2.1. Acciones en el corto plazo.

Las acciones que se proponen para el corto plazo se sustentan en el aprovechamiento integral de los recursos existentes en la estructura administrativa vigente y se basan fundamentalmente en una propuesta de modificación de los mecanismos de gestión. Esto tiene por objeto la implementación expeditiva de los mecanismos que permitan definir, en el menor tiempo posible, los lineamientos para el desarrollo del Territorio, marco de referencia imprescindible para la elaboración de los distintos programas sectoriales que coadyúven a alcanzar ese objetivo.

Esta estrategia, en el corto plazo tiene implícita la posibilidad de verificación - a través de su puesta en práctica - de los objetivos del sistema y de su real envergadura, evitando caer en el desarrollo de una propuesta tecnocrática alejada de la realidad imperante y de las necesidades que el propio Territorio defina.

## 2.2. Acciones en el mediano plazo.

Asimismo la puesta en marcha de estos nuevos mecanismos de gestión previstos para el corto plazo, permitirán retroalimentar los estudios para la implementación de un Sistema definitivo -a institucionalizarse en el mediano plazo- con el objeto de realizar las modificaciones de la estructura administrativa que necesariamente deban materializarse para ello.

## 3- BASES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN EL CORTO PLAZO.

- El Sistema tiene como objetivo el Planeamiento Integral del Territorio.
- La creación de un Sistema de Planeamiento deberá constituirse en el mecanismo permanente de:
  - . Fijación de políticas de desarrollo integral del Territorio en lo que hace al:
    - Desarrollo Económico Social.
    - Desarrollo Poblacional.
    - Desarrollo Urbano Regional.
  - . Elaboración de Estrategias para alcanzar dichos objetivos y políticas.
  - . Identificación de programas y prioridades para el desarrollo de esas estrategias.

. Elaboración y ejecución de los programas que se determinen.

- La creación del Sistema de Planeamiento no deberá implicar la generación de nuevos cargos administrativos y menos aún de algún tipo de superestructura, sino que -sobre la base de los actuales planteles de recursos materiales y humanos- fijará las reestructuraciones de las misiones y funciones de los organismos existentes a partir de un nuevo enfoque del Planeamiento para el desarrollo integral del Territorio.
- La reestructuración administrativa implicará determinar los mecanismos de gestión que permitan llevar adelante una política de desarrollo a través de una clara definición de:
  - . Objetivos y metas de desarrollo a alcanzar.
  - . Programas de desarrollo e inversión sectorial donde se expresen la forma y tiempo de concreción de esos objetivos.
  - . Corresponsabilidad sectorial a través de la participación de los funcionarios encargados de llevar adelante las políticas, planes y programas sectoriales.
- Esa reestructuración de los mecanismos de gestión implicará, que todas las políticas estructurales para el desarrollo a implementarse en el Territorio deberán contar con el aval de los funcionarios responsables de cada sector, los que a su vez realimentarán los planes propuestos dado el grado de conocimiento y responsabilidad directa sobre los mismos. Ello se traducirá en compromisos conducentes, a través de decisiones sucesivas y eslabonadas, a orientar eficientemente los recursos en función de los objetivos que se determinen.



- En este marco el Sistema Territorial de Planificación y Control de Suelo Urbano, en sus niveles territorial y municipal, queda inserto en el Planeamiento del desarrollo general del Territorio como un elemento sectorial que coadyuva al logro de objetivos y permite realimentar al planeamiento de los demás sectores concurrentes.
- Se entiende que la problemática urbana requiere de un desarrollo integral que promueva y sostenga un proceso de desarrollo económico y social -es decir que no sólo esté referida a aspectos de desarrollo físico- provisión de servicios, equipamientos e infraestructura, sino que se halla íntimamente relacionada a aspectos de integración económico-social.
- Para alcanzar los objetivos de desarrollo urbano se deberá implementar una Ley de Uso del Suelo Urbano que constituya el marco de referencia para regir y orientar la actividad pública y privada y a la cual deban ajustarse los planes de ordenamiento de los núcleos urbanos a nivel local.
- Los objetivos de desarrollo urbano, que en términos generales fueron presentados en el Informe de Avance del presente trabajo, serán reconsiderados en función de los lineamientos políticos emanados del Gobierno Territorial.

#### 4- PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO.

El Sistema Territorial de Planeamiento tendrá por objeto definir las políticas de desarrollo global del Territorio e instrumentar un mecanismo permanente que permita integrar todas las acciones concurrentes a ese fin.

Son objetivos del sistema:

1. En función de las políticas fijadas, proponer y evaluar todos los me

canismos necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo deseados.

2. Implementar la planificación en todas las etapas de formulación - de acciones, sectores de actividades y niveles de concreción liga dos al desarrollo integral del Territorio.
3. Estudiar y convenir los sistemas de coordinación con los demás or ganismos públicos de nivel internacional, nacional, regional y o-  
tros.
4. Resguardar el cumplimiento por parte del sector público de los li neamientos que se determinen, así como orientar y promover con ese mismo objetivo, las actividades del sector privado.
5. Reorientar, dentro del sistema administrativo existente, los recur-  
sos materiales y humanos para instrumentar la planificación y con-  
trol de las acciones de planeamiento.

Serán organismos del sistema:

Para asegurar los fines y objetivos del Sistema Territorial de Planeamien-  
to se propone el siguiente esquema organizativo:

1. Consejo Territorial de Planeamiento:

El consejo estará integrado por dos niveles, uno conformado por el Gobernador y los Ministros de: Gobierno; Economía y Hacienda, y de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, el Secretario General de la Gobernación y el Secretario de Educación y Cultura, que tendrá por finalidad fijar las políticas para el desarrollo integral de Terri-  
torio.

El segundo nivel estará integrado por las siguientes Subsecretarías: Salud Pública; Acción Social, Deportes y Recreación; Gobierno; Economía; Hacienda, de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, de Turismo e Información Pública y de Planeamiento.

Este nivel, en función de las políticas determinadas, coordinará las acciones sectoriales que les competen a fin de compatibilizar y estructurar las estrategias sectoriales concurrentes a alcanzar los objetivos y metas emergentes de aquellas políticas, definiendo las prioridades e identificando los programas para ello.

Dentro del sistema previsto, corresponderá a los Ministerios la coordinación y ejecución de los Programas sectoriales emergentes del Consejo Territorial de Planificación.

En este esquema, la determinación de los lineamientos del desarrollo urbano será competencia del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda - - quién, además fiscalizará y orientará el encuadramiento de los planes municipales de acuerdo a las pautas generales que se determinen a través de la Ley de Uso del Suelo Urbano que deberá implementarse - de acuerdo al trabajo en elaboración.

La propuesta que se presenta para la implementación del Sistema de Planeamiento Integral del Territorio, constituye un aporte que tiende a dar respuesta a los requerimientos explicitados por el Gobierno Territorial a los efectos de encarar, con una nueva visión, el desarrollo futuro del Territorio.

De ser aprobado los criterios que sustentan, este esquema, conjuntamente -

con la actualización de la situación físico-espacial imperante en los núcleos urbanos del Territorio, constituirán el marco de referencia que permitirán en marcar los objetivos para la elaboración del Sistema de Planeamiento y Control de Uso del Suelo Urbano y su respectiva norma legal.

#### CAPITULO IV: TAREAS EN DESARROLLO.

##### 1- Actualización del análisis urbano.

A los efectos de contar con una base de información precisa de la real situación que presentan los núcleos urbanos de Ushuaia y Río Grande, se ha iniciado por intermedio de la Dirección de Planeamiento Urbano Territorial la actualización de los relevamientos urbanísticos efectivizados en 1982. A través de esta tarea se actualizará la situación de la subdivisión del suelo a nivel de parcela urbana, a los efectos de verificar los patrones de subdivisión que se han adoptado en las nuevas áreas incorporadas para u sos urbanos.

Se verificará también para esas zonas la aptitud del área que las mismas -  
presentan para recibir nuevos asentamientos.

Asimismo, se relevará la actual situación de la ocupación parcelaria y se  
analizarán las posibles modificaciones del tejido urbano, y estado de la e  
dificación completándose la información correspondiente a usos urbanos, --  
tanto en las zonas relevadas en el anterior trabajo, como en las nuevas á-  
reas incorporadas.

Esta investigación se completará a través del análisis que las redes de in  
fraestructura presentan, en materia de gas, agua corriente, pavimentos, --  
cloacas y energía eléctrica.

Esta actualización de la información permitirá verificar a través de la te  
sis estructural de los núcleos urbanos del Territorio, las alteraciones y/o  
tendencias que se verifican actualmente con relación a la situación imperan  
te en 1982.

A través de esta confrontación se podrán extraer conclusiones válidas para  
la determinación de las políticas urbanas que deberán implementarse a tra--  
vés de la Ley de Uso del Suelo Urbano.

## 2- Obras y Acciones.

A fin de complementar el diagnóstico de situación referido a posibles variaia  
ciones o tendencias en las ciudades, se ha iniciado el análisis de obras o  
previsiones a nivel Nacional, Territorial y/o Municipal, programadas y enun  
ciadas específicamente para las áreas en estudio o bien que por sus caractere  
rísticas tengan una influencia directa sobre las mismas a través de los im  
pactos significativos que puedan generar.

### 3- Entrevistas realizadas.

Siguiendo con el criterio establecido desde el inicio del trabajo, durante la última estadía en el Territorio, se efectivizaron una serie de reuniones con distintos funcionarios del Gobierno Territorial. Durante las mismas se evaluaron aspectos sectoriales de la situación imperante, mereciendo destacar la realizada con el señor Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Arq. Jorge Marini de la cual también participó, el Asesor Territorial Arq. Marcial Zaragaza, donde se definió el marco de referencia en lo que deberá incertarse el Sistema Territorial de Planificación y Control del Suelo Urbano que es el objeto del presente trabajo.

Dicho marco prevé la necesidad de implementar un mecanismo que permita definir las políticas y programas para el desarrollo integral del Territorio, al cual deberán ajustarse los programas sectoriales que elaboren las distintas reparticiones del Gobierno Territorial.

Asimismo, se materializó una evaluación de los problemas más agudos que presenta el Territorio en la actualidad tanto desde el punto de vista urbano como territorial y a la necesidad de implementar acciones en el corto y mediano plazo que tiendan a conjugar dichas falencias.

También se evaluó la situación de Tolhuin y se acordó en la necesidad de efectuar un Plan expeditivo de ordenamiento de dicho núcleo a los efectos de encausar la demanda de tierras en esa zona.